

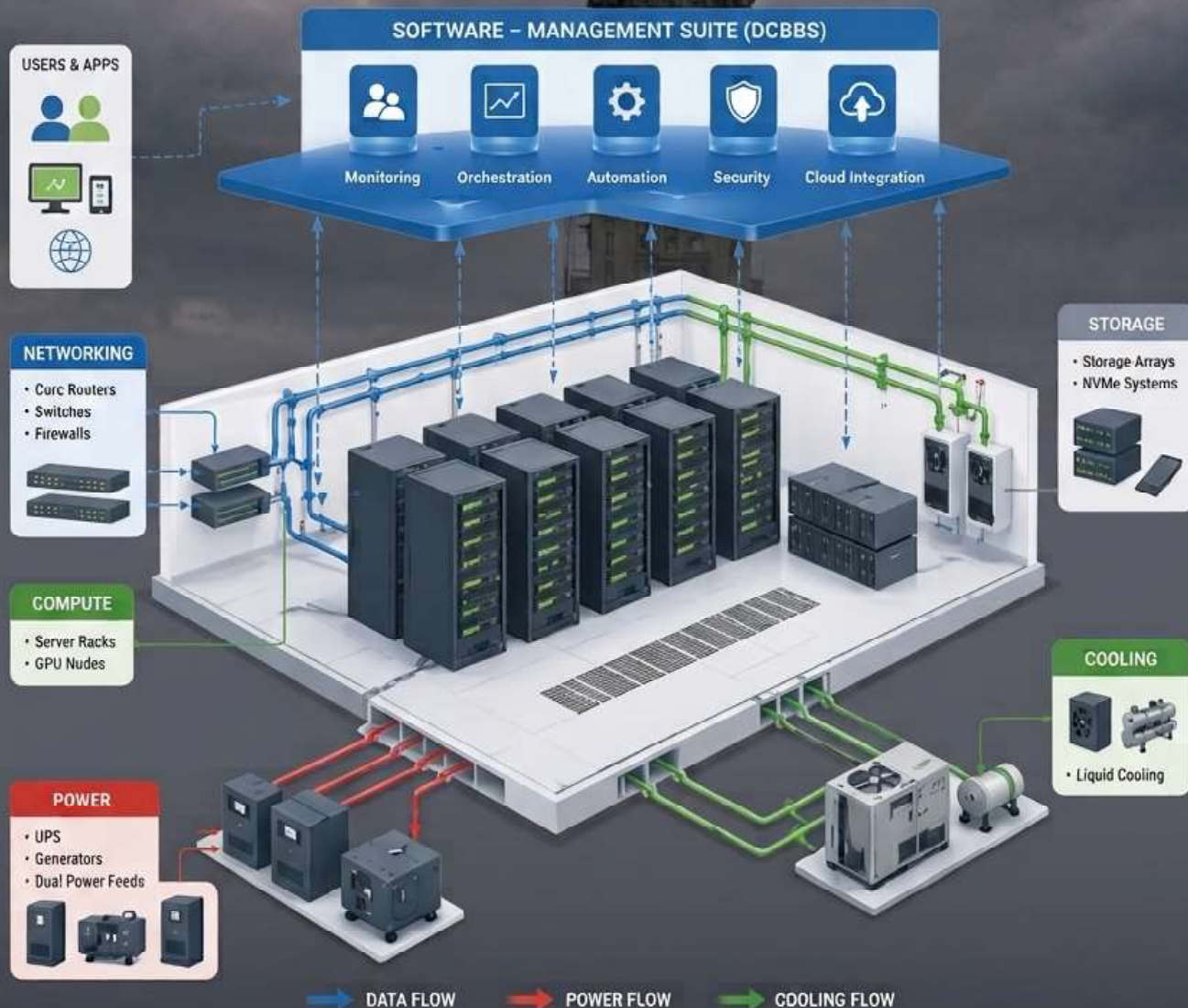
Opinar

opinar.uy

EDICIÓN | 846

Lunes 19 de octubre de 2026

La fuerza de las Ideas



CENTROS DE DATOS: SERIEDAD ANTES QUE PROMESAS

TABARÉ VIERA

El anuncio presidencial de una inversión de USD 5.700 millones merece ser bienvenido, pero también explicado. Con la poca información disponible, las dudas son más que las certezas.

Entre derechas e izquierdas

No adecuarse a los tiempos que corren es, quizá, un error imperdonable.

Creemos estar actualizados porque nos sentimos mentalmente capaces de correr, saltar y hacer las mismas cosas que cincuenta años atrás, cuando apenas con dieciséis

de edad, confiábamos en el futuro como un horizonte lejano, casi inalcanzable, aunque inevitable.

El único freno al tiempo que inexorablemente pasa es la supremacía de la realidad.

Podemos plantarnos ante la vida creyendo predecir el futuro, y por más extremistas que seamos, sin advertirlo, los años se suman y sobrevienen las limitaciones con las que hay que aprender a cohabitar, porque, aunque limitativas, como caminar más lento, hablar pausado o lo que sea que hagamos, sabemos que igual podremos hacerlo.

Después de todo -dicen los que saben- mientras en la escuela aprendemos a leer durante casi diez años, el aprendizaje profesional no es más que leer, pero para instruirnos y formarnos debidamente en el oficio que hayamos elegido para nuestro desarrollo personal.

Por eso, lo que más conviene es mirar al Uruguay en perspectiva. La nueva democracia, aquella que empezó en 1985 y que hoy tiene 41 años, si la vemos con un enfoque más de principios que de finales del siglo XX, percibiríamos que cuando José Batlle y Ordóñez la vivía, lo hacía con los pies sobre la «tierra purpúrea» con sus reglas, pero con otro fin: don Pepe apuntaba al «país modelo» que nacía como parte de una utopía política que se sería quien gestaría las reformas que terminarían con aquel país labrado a lanza y fuego.

Don Pepe era un reformador. Punto y aparte.

Entrar en los conceptos de -más o menos Estado. Parece un romanticismo propio de los cuentos de hadas, y la vida -al igual que nosotros- tiene fecha de principio y fin. Por eso dejar las cosas para mañana resultaría anacrónico.

Los presos: un dato. En Uruguay el Estado es un factor esencial y necesario, ineludible y objeto central para poder conjugar el verbo «cohabitar». Para que esto ocurra -en paz- debemos entender qué fue lo pasó para que en un país con una demografía literalmente estancada (más menos 3 millones de habitantes), su población infractora o carcelaria haya pasado de 2791 privados de libertad en 1990, a 16.570 en 2025; algo así como 480 presos cada 100 mil habitantes. Esos presos entre 1990 y 2026 se multiplicaron por seis, mientras la población total del país creció un 12,48% (un 0,4% anual), Argentina y Brasil promedian el 43% cada uno.



Cesar GARCÍA ACOSTA
Editor del semanario **OPINAR**
Técnico en Comunicación Social

En este contexto, el informe del LATINOBARÓMETRO 2026, muestra que Uruguay experimentó una caída en el apoyo a la democracia al 64%. A pesar de representar un descenso frente al 70% registrado en 2024 y al 74% de 2020, el país se mantiene en una posición de liderazgo regional.

Los principales datos sobre el caso uruguayo reflejan lo siguiente:

Liderazgo en la región: Uruguay se posiciona como el segundo país con mayor respaldo a la democracia en América Latina, superado únicamente por Argentina (73%) y situándose 12 puntos por encima del promedio regional (52%). El informe subraya que el 80% de los uruguayos considera que la democracia es el mejor sistema de gobierno, catalogándolo como el único país que «quizás» posee una democracia consolidada en el continente.

Aparición del pragmatismo autoritario: En sintonía con la tendencia regional, un 45% de los uruguayos afirmó que no le importaría la llegada de un gobierno no democrático si este fuera capaz de resolver los problemas económicos y de seguridad del país.

Desgaste de la confianza institucional: La percepción ciudadana sobre el desempeño del Estado ha empeorado notablemente. El 75% de los consultados en Uruguay desconfía del uso del dinero público derivado de los impuestos. Asimismo, solo el 31% considera que el Estado hace mucho o algo por ellos (frente al 51% en 2011), y apenas un 29% declaró sentirse representado por el Parlamento.

En este estudio el 22% de las personas entrevistadas en los 17 países se identificó como de izquierda, 39% de centro y 28% de derecha. Un 11% no dio respuesta.

Una de las respuestas a este trasiego político podría encontrar en el factor de la seguridad ciudadana.

La interrogante planteada ante el eventual trasiego ideológico -de derechas e

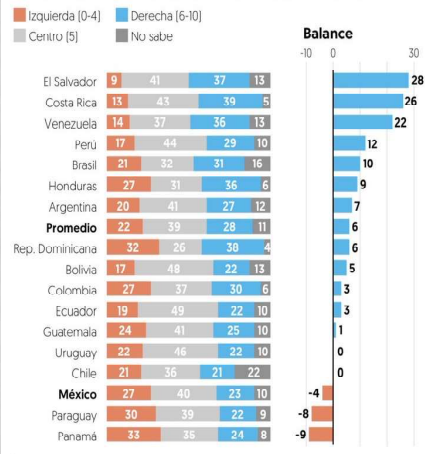
izquierdas- no sólo debe enfocarse al escenario de la inseguridad pública, sin asociarlo con los elementos que lo integran, como los encarcelados, el desempleo, la debilidad de la planificación urbana de las ciudades y las contingencias en la seguridad social.

En buen romance, y no hay que ser erudito en estos temas para percibirlo, el cambio en la matriz industrial del país dejó a los barrios obreros con fábricas con chimeneas apagadas, y generaciones de obreros que claudicaron a sus expensas.

Que las fábricas hayan cerrado es parte de una política que tuvo en cuenta a los empresarios como factor de reconversión. Se perdieron muchos en el camino mientras otros

Identidad ideológica

En política se habla normalmente de "izquierda" y "derecha". En una escala donde "0" es la "izquierda" y "10" la "derecha", ¿Dónde se ubicaría usted? [%]



Fuente: Encuesta Latinobarómetro 2026 con entrevistas personales en vivienda a 19 mil 207 adultos en 17 países de Latinoamérica y el Caribe.

fugaron tratando de salvar su capital.

Ese lugar cayó socialmente y sus espacios comunes pasaron a ser ocupados por lo que se define como la «informalidad». Después vino a su conquista el «crimen organizado» y el «narcotráfico», y con él, el caos.

Ante esto, ¿a quién le sirve las cárceles en Uruguay? Sostenerlas con impuestos que aportan a un nefasto hotelaría, se suma a la inseguridad y a la escuela del crimen a la que sirven.

Estamos ante la tormenta perfecta que se forma como antesala de un populismo radical que empieza a acecharnos y que, ciertamente, poco sabe de «izquierdas o derechas».



partido
COLORADO

LA SEMANA

Noticias y actividades del Partido Colorado

CONTENIDOS

Redactor Responsable

Tcs César GARCÍA ACOSTA.

Domicilio:

Martín C. Martínez 1630/401

Montevideo-Uruguay

Teléfono:

098686686

Registro MEC

Nº 2169/07, Tomo VI, fs. 388

Registro de Ley de Imprentas

Web: opinar.com.uy

Contacto:

cesargarciacosta@gmail.com

2 Latinobarómetro: entre derechas e izquierdas. **CESAR GARCÍA ACOSTA** **3** Centros de datos: seriedad antes que promesas. **TABARÉ VIERA** **4** El gobierno del relato – Orsi. **GONZALO DURANOLA** **6** La vara de los amigos. **RICARDO ACOSTA** **7** El derrumbe de la JUTEP. **DANIEL MANDURÉ** **8** El terror de las maras y el horror de Bukele. **EDUARDO IRIGOYEN GARCÍA** **9** La oposición que se achica El batllismo que falta. **EDUARDO FAZZIO** **10** Nunca subestimes la importancia de la verdad. **ZÓSIMO NOGUEIRA** **11** El precio de una elección. **GUZMÁN A. IFRÁN** **12** ¿Tenemos que esperar a que sea demasiado tarde? **PABLO CAFFARELLI** **12** Delitos nuevos, leyes viejas. **PEDRO BORDABERRY** **13** Hipocresía sobre tregua, por transacción petrolera. **LORENZO AGUIRRE** **14** Megaproyecto de inversión crea expectativas. **MARCELO GIOSCIA** **14** Nuestra diversidad es nuestro superpoder. **DAVID AURIS VILLEGAS** **15** El futuro y las represas del pasado. **FITZGERALD CANTERO** **16** La odisea de los giles: cuando la confianza de un pueblo se convierte en su mayor desafío. **ADRIAN BÁEZ**



**Tabaré VIERA DUARTE**

Senador. Fue intendente de Rivera, Presidente de Antel, director de Ose diputado, Vicepresidente del Congreso de Intendentes y ministro de Turismo.

El anuncio presidencial de una inversión de USD 5.700 millones merece ser bienvenido, pero también explicado. Con la poca información disponible, las dudas son más que las certezas. Pocos anuncios ocuparon tantos titulares en las últimas semanas como el que hizo el presidente de la República: una inversión de cinco mil setecientos millones de dólares en centros de datos. Para el lector que no está familiarizado con el término, un centro de datos es, en esencia, un enorme galpón lleno de computadoras que trabajan día y noche al servicio de internet y de la inteligencia artificial. Y que consumen cantidades enormes de electricidad.

Conviene decirlo desde el principio, para que no haya malentendidos: no soy pesimista ni pretendo ponerle palos en la rueda a nadie. Si llega una inversión

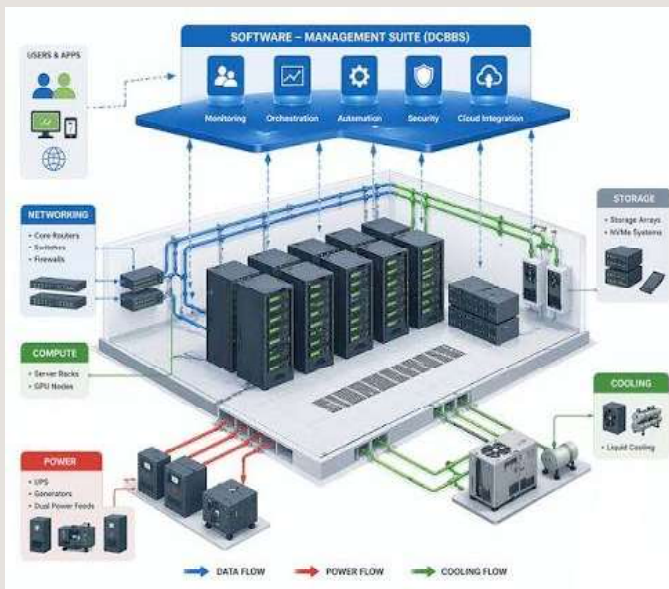
Centros de datos: seriedad antes que promesas

millones, que recién estaría terminada en 2033. Sin embargo, se dijo públicamente que el proyecto no requería obras del Estado. Algo no cierra.

También se prometió al proyecto una tarifa eléctrica «altamente competitiva». Es razonable para atraer inversiones, pero no se sabe cuál será ni quién cubrirá la diferencia si queda por debajo de lo que le cuesta a UTE producir esa energía. En un país donde las familias y las pequeñas empresas pagan una de las tarifas más caras de la región, la pregunta es inevitable.

Una experiencia que no debemos olvidar

Lo que más nos preocupa es que los uruguayos ya transitamos un camino parecido. Con los contratos de energía eólica, el Estado se comprometió a comprar energía durante veinte años, se usará o no. El resultado: se pagaron USD 142 millones por energía que nadie utilizó. Ese costo no lo absorbió nadie



de esta magnitud, que genere trabajo para nuestra gente, será bienvenida. Ojalá se concrete tal como fue anunciada. Seré el primero en reconocerlo. Pero quienes tenemos la responsabilidad de representar a los ciudadanos estamos obligados a algo más que aplaudir. Estamos obligados a la seriedad. Y la seriedad exige hacer preguntas, sobre todo cuando la información que brindó el propio presidente es tan escasa.

Lo firme y lo incierto

Vayamos a los hechos. De los USD 5.700 millones anunciados, hay una parte concreta: unos USD 200 millones destinados a un parque de energía solar en Florida, en terrenos de UTE. A cambio, UTE se compromete a comprar esa energía durante un plazo de hasta cuarenta años.

El resto, los USD 5.500 millones de los centros de datos propiamente dichos, no tiene hoy un cliente conocido, ni un operador identificado, ni se sabe quién aportará el dinero. Dicho en criollo: lo que pone el Estado es firme; lo que trae la empresa es, por ahora, una expectativa. A eso se suma que el acuerdo es confidencial. Los uruguayos no conocemos su contenido.

El sol no sale de noche

La segunda duda es de sentido común. Un centro de datos funciona las veinticuatro horas del día, todos los días del año. El sol, en cambio, no brilla de noche. Se afirmó que la energía generada por el propio proyecto sería suficiente. Los números indican otra cosa: la producción solar cubriría apenas una parte menor del consumo total. El resto debería aportarlo UTE, es decir, la energía de todos los uruguayos.

Una red al límite

La tercera duda tiene que ver con la infraestructura. Las líneas que transportan la electricidad hacia el sur del país ya operan cerca de su capacidad máxima. La propia UTE reconoce que necesita una obra nueva de más de USD 270

en abstracto; lo pagó cada familia en su factura de UTE, mes a mes. Ahora se habla de un contrato de cuarenta años. El doble.

Hay además un antecedente cercano. Google anunció un gran centro de datos en Canelones y terminó construyendo menos de la mitad de lo previsto. El proyecto actual sería unas ocho veces más grande que lo que finalmente se concretó.

Bien dice el refrán que el que se quema con leche, ve una vaca y llora. No se trata de llorar. Se trata de preguntar.

Lo que pedimos

Mis preguntas son sencillas. Quiero saber quién es el cliente y quién pone el dinero. A qué precio comprará UTE esa energía. Si UTE deberá pagar aunque los centros de datos nunca se construyan. Quién financiará la energía nocturna y las obras de la red. Y, sobre todo, pido que el acuerdo se haga público. Si es un buen acuerdo, no hay nada que esconder.

Para obtener esas respuestas voy a recurrir al Parlamento, como me corresponde como Senador de la República: con respeto y por los caminos institucionales. Porque lo peor que le puede pasar a la gente no es una inversión que no llega. Lo peor es una promesa anunciada con bombos y platillos, que despierta ilusiones y termina en decepción. Y en una cuenta que pagamos entre todos. Prefiero decir la verdad, aunque no sea la más agradable de escuchar. Prefiero la seriedad a los titulares. Quiero que esta inversión llegue, que funcione y que sea buena para el Uruguay. Precisamente por eso, pregunto.

El gobierno del relato - Orsi

Gonzalo DURAÑONA
Ingeniero.
Convencional del Partido Colorado



Hay gobiernos que pasan a la historia por sus reformas, otros por sus realizaciones y algunos por su extraordinaria capacidad para explicar por qué nada de lo prometido termina ocurriendo. El gobierno de Yamandú Orsi parece empeñado en conquistar un lugar destacado en esta última categoría. A poco más de un año y medio de asumir, apenas el 24% de los uruguayos aprueba su gestión, mientras el 57% la desapruueba, según la última encuesta de Cifra. Una verdadera hazaña para quienes llegaron prometiendo honestidad, esperanza y un país mejor. Evidentemente, los uruguayos todavía no hemos aprendido a apreciar las maravillas del progresismo gobernante.

La primera gran promesa fue la de un gobierno honesto y transparente, presentada bajo la acostumbrada superioridad moral frenteamplista. Sin embargo, Cecilia Cairo debió renunciar al Ministerio de Vivienda tras conocerse irregularidades tributarias e inmobiliarias; Alejandra Koch dejó la vicepresidencia

advertía incompatibilidades en el desempeño simultáneo de actividades públicas y privadas, la mayoría del organismo resolvió que no existían. Danza abandonó sus empleos privados, pero conservó el cargo público. La ética frenteamplista exhibe así una propiedad verdaderamente fascinante: su extraordinaria flexibilidad cuando corresponde aplicarla a los propios.

Si los escándalos ya habían puesto en entredicho la pretendida superioridad moral del Frente Amplio, la política tributaria terminó por desnudar su más absoluto cinismo político: la palabra empeñada no sobrevivió siquiera al primer presupuesto. Durante la campaña de 2024, Orsi aseguró que no aumentaría los impuestos y que la recaudación debía crecer mediante el desarrollo económico. Una vez en el gobierno, el Presupuesto incorporó el IVA del 22% al régimen de compras en el exterior, amplió el alcance del IRPF sobre rentas y ganancias de capital del exterior e introdujo un impuesto mínimo complementario para grandes multinacionales. El gobierno no sube impuestos: realiza adecuaciones tributarias.



de la Administración Nacional de Puertos después de participar en una votación que favoreció el ascenso de su esposo; y Eduardo Viera abandonó la presidencia de Colonización por cuestionamientos sobre incompatibilidades. A ellos se sumaron los representantes gubernamentales en la Caja de Profesionales, quienes terminaron renunciando tras la aprobación de partidas mensuales de \$131.520 para cargos que debían ser honorarios. Apenas diecinueve meses de gobierno y ya existe material suficiente para un seminario sobre ética pública. Naturalmente, dictado por el Frente Amplio.

Ni siquiera el presidente permaneció ajeno a las controversias. La adquisición de una camioneta Hyundai por US\$54.000, aproximadamente US\$25.000 por debajo de su precio comercial, abrió interrogantes sobre las condiciones de compra y las sucesivas explicaciones presidenciales. A este episodio se agregó el caso de Álvaro Danza en ASSE: mientras la asesoría jurídica de la Jute

No incrementa la presión fiscal: moderniza el sistema. Una sofisticación lingüística admirable, si no fuera porque las facturas las seguimos pagando los ciudadanos.

A esta creatividad fiscal se sumó la decisión de reducir las devoluciones del FONASA. Mediante una modificación del cálculo del Costo Promedio Equivalente, entre 60.000 y 70.000 uruguayos dejarán de percibir las en 2027, mientras otros recibirán importes menores. El propio Ministerio de Economía estima una reducción de entre 70 y 80 millones de dólares anuales en las devoluciones. Una verdadera genialidad: sin modificar las tasas de aportación, el Estado consigue reducir sensiblemente el dinero que devuelve a los contribuyentes. Primero prometieron no aumentar los impuestos; después encontraron la manera de recaudar más y devolver menos. La palabra electoral parece tener una fecha de vencimiento bastante precisa: el día de las elecciones.

La misma memoria selectiva caracteriza aquellas vehementes denuncias formuladas desde la oposición. Durante el gobierno de coalición, el Frente Amplio cuestionaba permanentemente el Precio de Paridad de Importación de los combustibles, acusando al gobierno de perjudicar a los consumidores. Una vez en el poder, conservaron el PPI como referencia.



Pero la verdadera proeza discursiva llegó de la mano del secretario de Presidencia, Alejandro «Pacha» Sánchez, quien llegó a sostener que Uruguay tenía los combustibles más baratos de la región. En octubre de 2026, la nafta cuesta aproximadamente US\$2,25 por litro en Uruguay, frente a US\$1,46 en Argentina y US\$1,26 en Brasil: 54% más cara que la argentina y 79% más que la brasileña. Sánchez parece haber descubierto una región desconocida por la cartografía moderna. Quizás el próximo paso sea convencernos de que cuanto más pagamos, más estamos ahorrando.

Con OSE, el contraste entre oposición y gobierno adquiere dimensiones igualmente grotescas. Durante la sequía de 2023, el Frente Amplio reclamaba rebajas tarifarias y denunciaba la calidad del agua. Ya en el poder, dispuso para enero de 2026 un aumento del 8,5%, incluyendo un componente adicional del 3,7% destinado a corregir los desequilibrios financieros de la empresa. Para completar el panorama, durante el verano se detectaron concentraciones de trihalometanos superiores a los límites normativos. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, debe responder ahora por una realidad bastante menos complaciente que sus antiguos discursos ambientalistas. Parece que el agua cambia de calidad política según quién gobierne. Lástima que los uruguayos debamos pagarla y consumirla independientemente del partido que administre OSE.

La seguridad constituye otra de las grandes promesas enfrentadas a resultados que el gobierno difícilmente pueda exhibir con orgullo. Orsi anunció más de 2.000 incorporaciones policiales, nuevas tecnologías y un ambicioso plan nacional, pero durante el primer semestre de 2026 se registraron 195 homicidios, frente a 183 en igual período del año anterior. A ese deterioro se suma el desgaste político del ministro del Interior, Carlos Negro, cuya gestión recogía apenas un 21% de aprobación y un 64% de desaprobación en la encuesta de Cifra difundida en julio, la peor evaluación entre los ministros relevados. Un balance poco alentador para una administración que llegó prometiendo recuperar la seguridad de los ciudadanos.

Frente a este escenario, el Ministerio del Interior destaca la disminución de las denuncias por hurtos y rapiñas, como si una reducción de los registros demostrara necesariamente una disminución de los delitos. El propio INE estableció que, durante 2025, apenas el 38,1% de los robos relevados en su encuesta de victimización terminó en una denuncia formal. ¿Cuántos ciudadanos han dejado de denunciar por considerarlo una pérdida de tiempo? ¿Cuántos perdieron la esperanza de obtener resultados? Resulta bastante más sencillo exhibir gráficas descendentes que recuperar la confianza de una población cansada de vivir entre rejas. El problema de la inseguridad no desaparece cuando desaparece la denuncia.

En materia social, la maquinaria del relato alcanza su máxima sofisticación. Presidencia anunció una reducción del 33% de la indigencia y Fernando Pereira no tardó en sumarse a las celebraciones. Las estimaciones puntuales del INE pasaron del 1,8% al 1,2%, pero la comunicación presidencial omitió los márgenes de error y cualquier análisis de significación estadística, elementos indispensables para evaluar la solidez de semejante proclamación. La pobreza estimada supuestamente descendió, del 17,7% al 14,8% - si nos olvidamos de los márgenes de error -, aunque miles de uruguayos continúan enfrentando enormes dificultades económicas. Una vez más, las autoridades convirtieron los resultados de una encuesta en una victoria comunicacional, sin proporcionar toda la información necesaria para valorar su alcance. Al parecer, la incertidumbre científica deja de ser relevante cuando amenaza con arruinar una celebración oficialista.

El contraste resulta particularmente incómodo frente a la situación de calle, una de las manifestaciones más dramáticas de nuestra crisis social. La cantidad de personas atendidas en dispositivos de alojamiento pasó de 11.261 en 2024 a 13.597 en 2025. La senadora Blanca Rodríguez aportó, entretanto, una singular metodología de observación social: aseguró que desde su ventana ya no veía a las personas que antes dormían cerca de su casa. Un procedimiento práctico, aunque de dudosa utilidad para conocer la realidad nacional. Quizás el próximo informe social deba elaborarse recorriendo las ventanas de los legisladores oficialistas.

Las dificultades de la economía productiva ofrecen otro contraste con el optimismo gubernamental. CLA SIENZ anunció el cierre de sus operaciones industriales en enero de 2026, mientras cientos de extrabajadores de Yazaki continuaban sufriendo las consecuencias de un cierre anterior. A ello se suman miles de comercios que desaparecen, costos operativos elevados y empresas que luchan por conservar su viabilidad. Producir, contratar e invertir en Uruguay continúa siendo una carrera de obstáculos burocráticos y tributarios, mientras el Frente Amplio persiste en identificar el progreso con la expansión del aparato estatal. Una concepción que confunde protección social con dependencia,

regulación con desarrollo y recaudación con prosperidad. En este escenario apareció, oportunamente, el anuncio de una inversión de US\$5.700 millones por parte de la española Solaria. La mayor inversión de nuestra historia, proclamó el gobierno. El pequeño detalle es que lo firmado constituye un acuerdo para desarrollar un proyecto cuya ejecución está prevista en etapas: no son US\$5.700 millones ya desembolsados, ni instalaciones funcionando, ni empleos efectivamente creados. Se anuncian centros de datos de hasta 500 megavatios, un régimen de zona franca, un eventual contrato energético con UTE de hasta cuarenta años y miles de puestos de trabajo futuros. ¿Cuáles son las garantías financieras y las obligaciones estatales? ¿Qué riesgos asumirá UTE? ¿Cuánto empleo nacional se generará realmente? Preguntas que merecen respuestas antes de convertir un anuncio empresarial en una conquista histórica. En el Uruguay del relato, aparentemente alcanza con firmar un acuerdo para inaugurar una inversión.

La versión departamental de esta política comunicacional tiene su escenario privilegiado en Montevideo. Mario Bergara anunció que el 91% de los vecinos consultados en zonas beneficiadas por el nuevo sistema de recolección percibía mejoras en la limpieza. Una cifra estupenda para una capital que continúa padeciendo contenedores desbordados, calles sucias, grafitis y vandalismo. Bastante menos entusiasta fue la evaluación de los montevideanos: Factum registró en agosto apenas un 29% de aprobación y un 44% de desaprobación de su gestión. Evidentemente, los resultados dependen mucho de dónde se pregunta y, sobre todo, de qué parte de Montevideo se decide mirar.

Mientras el intendente anuncia mejoras, la ciudad continúa ofreciendo un espectáculo de degradación urbana: faroles, luminarias, rejas, cableado, mobiliario público y monumentos expuestos al robo y la reventa por unos miserables vintenes; espacios públicos deteriorados, paredes vandalizadas y comercios protegidos detrás de rejas. Cada elemento arrancado representa patrimonio colectivo destruido y dinero de los contribuyentes destinado a reponerlo. Tras décadas de administraciones frenteamplicas, Montevideo parece resignada a una decadencia administrada, donde la suciedad se mide en toneladas retiradas, el vandalismo se relativiza y la inseguridad se disimula entre estadísticas.

Sin embargo, reducir el problema del Frente Amplio a esta sucesión de incumplimientos sería ignorar su dimensión más profunda: una concepción política que ha sustituido la vocación transformadora por la administración del poder y el desarrollo productivo por la expansión burocrática. Un socialismo estatista que continúa presentándose como progresista mientras reproduce estructuras ineficientes, desalienta la iniciativa privada y pretende reservarse el monopolio de la sensibilidad social. Un modelo en el que el ciudadano productivo termina convertido en financiador permanente de un aparato estatal cuya eficiencia rara vez se somete al mismo escrutinio que sus obligaciones tributarias.

Frente a este modelo, Uruguay necesita recuperar la ambición reformista que alguna vez lo convirtió en referencia de América Latina. Y esa tradición tiene nombre: batllismo. No el batllismo convertido en pieza de museo, sino uno moderno, dinámico, liberal, humanista y profundamente republicano. José Batlle y Ordóñez no impulsó sus reformas para consagrar la ineficiencia ni perpetuar la dependencia económica, sino para construir una sociedad de ciudadanos libres, educados y capaces de prosperar. Su grandeza consistió en combinar libertad con justicia social, iniciativa con protección y progreso material con dignidad humana.

El batllismo del siglo XXI debe recuperar esa vocación transformadora, colocando la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro del proyecto nacional. Impulsar industrias competitivas, atraer inversiones, fomentar el emprendimiento, modernizar la administración pública y recuperar la seguridad de nuestros barrios. Un proyecto que comprenda que la prosperidad se construye mediante talento, trabajo, libertad económica y reglas claras, y que la verdadera justicia social consiste en ofrecer oportunidades para que cada ciudadano pueda desarrollar plenamente sus capacidades.

Necesitamos un Estado fuerte y eficiente, no burocrático; solidario, pero no paternalista. Un Estado que proteja sin asfixiar, que regule sin paralizar y que rinda cuentas por cada peso administrado. La República necesita recuperar el valor de la palabra empeñada, la independencia de sus organismos de contralor y la responsabilidad de quienes ejercen el poder. Porque la superioridad moral no se proclama: se demuestra. Y la capacidad de gobernar no se acredita mediante discursos, sino mediante realizaciones.

El batllismo debe volver a gobernar. No para sustituir un relato por otro, sino para recuperar aquella voluntad reformista que hizo del Uruguay una nación de avanzada. Para demostrar que libertad económica y justicia social pueden avanzar juntas, que el Estado puede servir al ciudadano sin someterlo y que el progreso debe medirse en realizaciones, no en discursos.

Porque el verdadero problema del gobierno de Orsi no es que comunique demasiado, sino que pretende que la comunicación sustituya aquello que no consigue demostrar con hechos. Y mientras el Frente Amplio continúa perfeccionando su relato, Uruguay pierde un recurso mucho más valioso que cualquier presupuesto publicitario: el tiempo.

El Uruguay de José Batlle y Ordóñez no nació de un relato progresista. Nació de la voluntad política de transformar la realidad. Y esa es, precisamente, la diferencia entre proclamarse progresista y hacer posible el progreso.

La vara de los amigos

Ricardo ACOSTA CALVO
Periodista



P

edro Sánchez lleva años presentándose como uno de los grandes referentes de la izquierda europea. Habla de justicia social, de defender a los más débiles y de luchar contra la corrupción. Pero hoy, con elecciones anticipadas a la vista, el presidente español tiene demasiados problemas como para seguir mirando hacia otro lado.

Y no son solamente los problemas de su Gobierno. También están las investigaciones que afectan a su esposa, a su hermano, a antiguos colaboradores y a dirigentes de su propio partido. Cada caso tiene su historia y deberá resolverse donde corresponde, en la Justicia. Pero una cosa es respetar la presunción de inocencia y otra muy distinta es pretender que todo esto no tiene consecuencias políticas.

Sánchez llegó al poder prometiendo regenerar la política española. Ahora es él quien tiene que dar explicaciones. Y no alcanza con decir que todo es una campaña de sus adversarios. Puede haber intereses políticos detrás de algunas denuncias, como ocurre en muchos países, pero eso no borra los hechos que se investigan ni las responsabilidades que puedan existir.

El caso de José Luis Ábalos, su antiguo ministro y hombre de confianza, es especialmente grave. Los procedimientos judiciales relacionados con él y con Koldo García pusieron bajo la lupa contratos públicos y presuntas comisiones ilegales. Estamos hablando de compras realizadas durante la pandemia, cuando miles de personas sufrían las consecuencias de una crisis sanitaria y el Estado gastaba enormes cantidades de dinero. Que una trama de este tipo alcance a personas que ocuparon puestos tan importantes en el Gobierno debería ser motivo de explicaciones mucho más profundas que un simple deslinde de responsabilidades.

Después está Begoña Gómez, la esposa del presidente, que ha afrontado actuaciones judiciales por presuntas irregularidades relacionadas con su actividad profesional. También está el caso de David Sánchez, hermano del mandatario, por su contratación en la administración pública. Son situaciones diferentes y deben describirse con precisión, sin condenar a nadie antes de tiempo. Pero tampoco hay motivos para fingir que estos asuntos no afectan a la imagen del Gobierno.

Sánchez no está condenado por estos casos. Eso debe quedar claro. Pero el problema político va mucho más allá de su responsabilidad penal personal. Un presidente debe responder por su gestión, por las personas que coloca en puestos de confianza y por lo que sucede dentro de su partido. Si cada vez que aparece un escándalo la respuesta es que el presidente no tiene nada que ver, entonces cabe preguntarse para qué sirve la responsabilidad política.

Y mientras todo esto ocurre, España tiene problemas que no se resuelven con discursos. La vivienda es uno de los más graves. Para muchos jóvenes, independizarse se ha convertido en una misión casi imposible. Los alquileres se llevan una parte enorme de los ingresos y comprar una casa parece cada vez más lejano para muchas familias. El Gobierno anuncia medidas, propone regulaciones y promete soluciones, pero el problema sigue ahí. Y cuando la oposición cuestiona los resultados, no alcanza con acusarla de defender a los poderosos. La gente necesita una vivienda, no una pelea permanente entre partidos.

Sánchez convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, en medio de las dificultades políticas de su Gobierno. La decisión abre una nueva etapa de enfrentamiento y campaña electoral en España. Pero los españoles también tienen derecho a preguntarse cómo se ha llegado hasta aquí, qué hizo el Gobierno con el poder que recibió y por qué tantos asuntos relacionados con su entorno terminan bajo la lupa judicial.

Hay algo que me llama la atención de todo esto. Sánchez habla como si estuviera llamado a defender una causa histórica, como si las críticas contra él fueran necesariamente ataques contra el progreso. Pero ningún dirigente está por encima de las preguntas. Ni siquiera aquellos que dicen representar las mejores causas.

España tuvo otra historia socialista. Felipe González gobernó durante una etapa fundamental de la transformación del país, después de la dictadura franquista. Su gestión también tuvo sombras y escándalos graves, como los casos Filesa y Roldán. No se trata de idealizar aquellos años ni de decir que antes todo era mejor. Se trata de recordar

LA VARA DE LOS AMIGOS



que el socialismo español no empezó con Sánchez y que la historia de un partido no puede servir de excusa para lo que hacen sus dirigentes actuales.

El problema de Sánchez es que convirtió la lucha contra la corrupción en una de sus banderas políticas. Y ahora debe afrontar una crisis que golpea a su propio partido y a su entorno. Cuando uno exige explicaciones a los demás, tiene que estar dispuesto a darlas cuando le toca. De lo contrario, el discurso termina siendo solamente eso: un discurso.

Y acá es donde el asunto también nos toca de cerca.

El Frente Amplio y buena parte de la izquierda uruguaya han mantenido vínculos políticos con dirigentes que hoy representan algunos de los peores ejemplos de deterioro democrático en América Latina. Durante años hubo cercanía con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, mientras Venezuela avanzaba hacia una crisis institucional y humanitaria enorme. También hubo afinidad con Daniel Ortega en Nicaragua, donde el Gobierno terminó persiguiendo a sus adversarios y cerrando espacios democráticos. Y existieron relaciones políticas estrechas con los Kirchner en Argentina y con Lula en Brasil, aunque cada uno de esos casos tiene una historia judicial y política diferente.

Y tampoco podemos dejar afuera a Cuba. Décadas de un régimen de partido único, restricciones a las libertades políticas, presos por motivos políticos y una población que sufre las consecuencias de una crisis económica profunda. Sin embargo, para una parte de la izquierda latinoamericana, Cuba sigue siendo una referencia y una revolución que merece ser defendida, incluso cuando las libertades que se reclaman para otros países no existen de la misma manera dentro de la isla.

El Frente Amplio tiene una historia de cercanía política con Cuba y distintas sensibilidades dentro de su propia coalición. Eso no significa que todos sus integrantes piensen igual, pero sí obliga a preguntarse por qué cuesta tanto condenar sin vueltas los atropellos a las libertades cuando los comete un gobierno ideológicamente cercano. La democracia no puede ser una exigencia para los adversarios y un asunto secundario para los amigos. No se trata de decir que todos son iguales ni de afirmar que todos cometieron los mismos delitos. Se trata de algo mucho más sencillo: ¿por qué tantas veces la afinidad ideológica parece pesar más que la defensa de la democracia y la transparencia?

Maduro no se convirtió en un gobernante autoritario de un día para otro. Las señales estaban ahí. Lo mismo puede decirse del deterioro democrático en Nicaragua y de las restricciones a las libertades en Cuba. Sin embargo, durante demasiado tiempo hubo sectores de la izquierda regional que encontraron explicaciones, minimizaron las críticas o prefirieron mirar hacia otro lado. Cuando se trata de gobiernos amigos, la vara parece cambiar.

En Uruguay también tenemos asuntos que no deberían quedar guardados en un cajón. El caso Pluna, las decisiones que llevaron a su cierre y las responsabilidades políticas del gobierno de José Mujica siguen formando parte de una discusión necesaria. Lo mismo ocurre con la gestión de ANCAP y las pérdidas que terminaron generando un fuerte debate político. No todo cuestionamiento significa que haya existido un delito, pero tampoco todo puede darse por cerrado porque el gobierno de turno pertenezca al Frente Amplio.

Por eso me parece importante observar la relación entre Pedro Sánchez y Yamandú Orsi. Ambos comparten una afinidad política que se ha expresado públicamente, con reuniones y participación en iniciativas internacionales del progresismo. Esa relación es legítima entre gobiernos, pero también merece preguntas. ¿Qué visión de la política comparten? ¿Qué importancia les dan a la transparencia y a la responsabilidad de sus propios dirigentes? ¿Se exige lo mismo a un aliado que a un adversario?

Orsi no es Sánchez, y el Frente Amplio no es el PSOE. Pero cuando se reivindican espacios políticos comunes y se presenta a determinados dirigentes como referentes, también hay que estar dispuestos a discutir lo que esos referentes hacen y los problemas que enfrentan.

España es mucho más que Pedro Sánchez. Es un país con una historia enorme, con instituciones democráticas y con millones de ciudadanos que no tienen por qué cargar con los errores de sus gobernantes. Tengo, además, un vínculo familiar con esa tierra, y cuesta ver cómo la política puede terminar convertida en una pelea permanente mientras los problemas cotidianos siguen esperando respuestas.

Los españoles tendrán la oportunidad de pronunciarse en las urnas el próximo 29 de noviembre. No estarán juzgando penalmente a Sánchez, porque esa tarea corresponde a la Justicia. Estarán decidiendo si confían en su gestión, en sus explicaciones y en el rumbo que propone para el país.

Lo que está en discusión no es solamente el futuro de un presidente. Es algo que vale para España, para Uruguay y para cualquier democracia: ningún partido puede reclamar para sí el monopolio de la honestidad. Ninguna ideología convierte a sus dirigentes en personas intocables. Y ningún gobierno debería creer que alcanza con señalar los errores de sus adversarios para evitar que los ciudadanos miren los propios.

Pedro Sánchez tendrá que responder por su gestión y por la crisis política que atraviesa su entorno. El Frente Amplio, por su parte, tendrá que explicar qué criterios utiliza cuando elige a sus aliados y qué tan dispuesto está a exigirles lo mismo que exige a los demás. Porque la honestidad no debería depender del partido al que uno pertenece. Y cuando la política se olvida de eso, los que terminan pagando la cuenta son siempre los ciudadanos.



Daniel MANDURÉ
Convencional del PC.
Fue Edil por Montevideo

El derrumbe de la JUTEP

Nuestro país tiene una larga tradición jurídica e institucional de legislar, reglamentar, crear normativas y procedimientos. Pero la ley no transforma la realidad por el solo hecho de ser aprobada. Necesita de autoridades dispuestas a hacerlas cumplir. De organismos capacitados para fiscalizar. Contar con los recursos económicos y humanos para realizar esos controles y para aplicar sanciones cuando el incumplimiento lo amerite. De lo contrario la norma corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones.

En muchos casos esto no sucede.

Existe normativa para prácticamente todo, algunas veces superpuestas, contradictorias y en algunos casos extremadamente burocráticas. Abundan las normas y escasean los controles. Pasamos de ser un país de las leyes del papel al de la impunidad en los hechos. Lo que se denomina las leyes de letra muerta (Tema este que merece ser desarrollado en otra oportunidad).



Pero por si esto fuera poco y para el colmo de males creamos organismos de control como la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) que contradice los principios que dieron su origen. Fue creada para promover la transparencia, prevenir posibles hechos de corrupción y vigilar la conducta ética de quienes se dedican a la función pública.

Desde su consolidación institucional ha estado en el centro de la polémica y las intensas disputas. Con toda razón.

La JUTEP no fue creada como un elemento que decore el organigrama del Estado ni para cumplir con una formalidad institucional. Su existencia responde a una necesidad republicana esencial: que el ejercicio del poder este sometido a controles creíbles, imparciales y efectivos.

Hoy eso no sucede.

¿Qué pasa cuando una institución concebida para generar confianza comienza a despertar dudas muy fundadas relacionadas a su independencia, transparencia y ecuanimidad de criterios?

Cuando esto sucede la credibilidad y confianza de la JUTEP se va derrumbando poco a poco. Todos los días un nuevo caso lo deja en evidencia. La disparidad en los tiempos de actuación, sin procedimientos cristalinos ni criterios jurídicos consistentes o evidencias mínimamente verificables.

Cuando el país crea un organismo de control lo hace porque considera que el poder necesita límites. Para fortalecer todos los mecanismos de transparencia en el ejercicio de la función pública. Sin importar quien gobierne.

No se puede actuar por reflejo de acuerdo con la presión de las redes sociales, menos aún responder a las directivas de un partido político o terminar convertido en un instrumento para atacar al adversario de turno. Tampoco para demorar el tratamiento o archivar asuntos incómodos para el gobierno.

Hoy inexplicablemente los casos de la compra de la camioneta del presidente Orsi y del auto destinado a una rifa para financiar la campaña, siguen en algún cajón a la espera de alguna definición.

Otro caso evidente fue la vidriosa situación de Álvaro Danza, donde la mayoría del directorio hizo caso omiso al informe del departamento jurídico que detectaba irregularidades e incompatibilidades en su labor pública y privada, como quedó absolutamente confirmado.

Se llegó a modificar actas y eliminar las opiniones discordes con los informes aprobados por la mayoría.

El propio expresidente frenteamplista de la JUTEP Gil Iribarne, vinculado al MPP, criticó duramente en abril de este año la partidización del organismo. Diciendo que la JUTEP ha quedado en una situación de gran desprestigio. Criticó tanto su funcionamiento como su integración. Agregando que por esa politización ha perdido imparcialidad y seriedad. Y que el desgaste que viene sufriendo por las permanentes disputas han dejado a la institución al borde del abismo. Con respecto a la compra de la camioneta del presidente, reconoció que fue un error y que no debió aceptar ese «descuento».

No nos podemos olvidar de la renuncia que le pidió el Partido Comunista en el 2021 al integrante de la JUTEP Jorge Castro, que pertenecía a su partido, por haber firmado un dictamen que cuestionaba la gestión del Frente Amplio con respecto a la construcción del Antel Arena.

La JUTEP está totalmente politizada, ha sufrido un gran debilitamiento institucional. Está padeciendo una gran crisis estructural. No ofrece garantías técnicas de imparcialidad. Ya nadie confía.

Hoy tenemos una JUTEP que funciona bajo la lógica de los partidos políticos. En vez de tener un organismo que controle al poder tenemos al poder condicionando a la JUTEP.

No necesitamos menos controles, necesitamos mejores controles.

No necesitamos debilitar los órganos de transparencia sino asegurarnos que sean técnicamente solventes, profesionalmente independientes, políticamente imparciales y sin evidencia de conflicto de intereses de ningún tipo.

Los cambios no pueden esperar. Se debe realizar una reforma profunda del organismo.

Se debe comenzar por modificar el sistema de designación.

Debería estar integrado por personalidades que sean garantía de neutralidad e independencia. Impermeables a las presiones partidarias.

Con protocolos claros para tramitar denuncias, priorizar actuaciones y justificar demoras.

Criterios objetivos para establecer prioridades. Sin distinción partidaria.

Con auditorías independientes sobre procedimientos y control de calidad de las resoluciones adoptadas.

Fijando plazos para el tratamiento de los expedientes.

Con personal suficiente y capacitado técnicamente.

Una JUTEP oportuna y eficaz. Transparente y responsable.

Hoy tenemos un organismo que custodia la transparencia pero que no es transparente. Un organismo que debe velar por el comportamiento ético de quien ejerce la función pública pero donde la ética brilla por su ausencia.

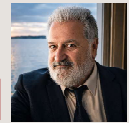
Engrosamos el Estado, creamos un organismo, con el costo que ello tiene para el contribuyente para que las decisiones las tomen en el comité de base.

Hoy tenemos una JUTEP totalmente alejada de los principios que dieron motivo a su existencia.

Una JUTEP en estas condiciones es mejor que no exista. O se modifica radicalmente o se elimina.

El terror de las maras y el horror de Bukele

Eduardo IRIGOYEN
Periodista



H

abía una vez un país donde el miedo tenía dueño.

Y no era el Estado. Eran las maras.

Extorsionaban y masacraban a sangre fría. Al kiosquero, al comerciante, al chofer y hasta al vecino que solo quería volver a casa sin pagar el «impuesto de guerra». Durante años, miles de salvadoreños vivieron atrapados entre la pistola del pandillero y un Estado incapaz de protegerlos.

No conviene olvidarlo.

El Salvador arrastraba las consecuencias de una guerra civil brutal, una enorme desigualdad y unas instituciones que no garantizaban seguridad. Las maras MS-13 y Barrio 18 se expandieron por Centroamérica, favorecidas también por las deportaciones desde Estados Unidos.

Los gobiernos anteriores fracasaron: hubo represión, treguas cuestionadas y decisiones que alimentaron la desconfianza. Quien nunca vivió bajo esa amenaza puede hablar fácilmente de garantías. Tiene razón en exigirlos. Pero debería comprender lo que significa vivir con miedo a que maten a un hijo o a que salir a trabajar sea una ruleta rusa.

Llegó Bukele y cambió el escenario

Entonces, parafraseando a Carlos Puebla, llegó Nayib Bukele y mandó a parar. Impuso mano dura y, tras la escalada de homicidios de marzo de 2022, instauró un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales y permitió detenciones masivas. Lo presentó como temporal; se fue prorrogando hasta volverse permanente.

Los resultados en homicidios fueron extraordinarios: las cifras oficiales sitúan la tasa de 2025 en 1,3 por cada 100.000 habitantes. Sería absurdo negarlo porque Bukele nos desagrada. Eso sí: las estadísticas oficiales han sido cuestionadas, conviene distinguir los datos gubernamentales de una evaluación independiente. Para una población que vivió bajo el terror de las pandillas, recuperar las calles no es un detalle estadístico. Es recuperar parte de la vida. Bukele entendió algo que otros no: la gente no quiere discursos sobre seguridad. Quiere seguridad.

Y ahí comenzó su popularidad internacional. Se convirtió en una especie de rockstar político, admirado por ciudadanos hartos de la delincuencia y por dirigentes que ven en su modelo una receta exportable. La discusión se simplificó hasta el absurdo: o estás con Bukele o estás con las maras.

El precio del milagro

Desde marzo de 2022, más de 90.000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción. El propio gobierno informó de la liberación de miles. Esa cifra obliga a preguntarse cuántas fueron encarceladas sin elementos suficientes. No hablamos solo de denuncias de adversarios políticos: organizaciones internacionales han documentado detenciones arbitrarias, incomunicación, obstáculos para acceder a abogados, torturas y muertes bajo custodia estatal. Cada caso exige investigación, porque estar preso no significa perder el derecho a la vida.

En marzo de 2026, el Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentó un informe sobre si las violaciones documentadas podían constituir crímenes de lesa humanidad. No es una acusación que deba despacharse como campaña contra el presidente. Es un señalamiento grave que merece responderse con pruebas.

También preocupa lo institucional: en 2021, la Asamblea destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. La emergencia dejó de ser excepcional para volverse normalidad. Cuando el gobierno concentra tanto poder, persigue periodistas y convierte las críticas en sospechas de complicidad con delinquentes, ya no hablamos solo de seguridad. Hablamos de una transformación del sistema político.

No todos los detenidos son pandilleros

El Estado no puede reemplazar la investigación por la sospecha. Vivir en un barrio pobre, tener tatuajes, ser joven o haber sido denunciado anónimamente no demuestra pertenencia a una organización criminal. Human Rights Watch recogió testimonios de policías que describieron detenciones arbitrarias y presiones para impedir liberaciones. Eso no significa que todos fueran inocentes. Significa que el sistema produjo errores graves.

Pensemos en las familias: hijos sin padre, madres que no saben dónde está su hijo, quienes no consiguen defensa efectiva. Si después se demuestra que el detenido no tenía relación con las maras, ¿quién le devuelve los años perdidos? La presunción de inocencia no es un invento de abogados con tiempo libre. Es una conquista de la civilización jurídica. Detener pandilleros no exige renunciar a las garantías. Exige investigar mejor, tener policías profesionales, fiscales capaces, jueces independientes y cárceles controladas. Si un Estado necesita suspender garantías indefinidamente para mantener la seguridad, hay algo de fondo que no resuelve.

Ni con las maras ni con el patrón

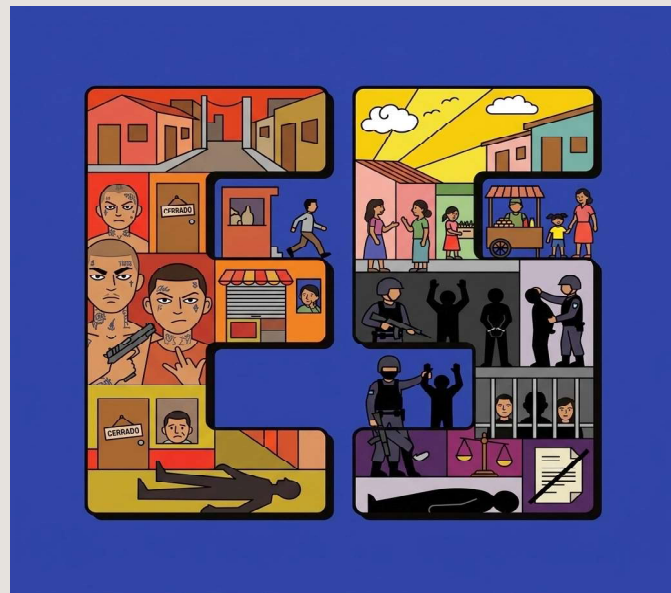
No hay contradicción entre condenar a las maras y denunciar los abusos de Bukele. La contradicción aparece cuando se pretende que, para defender los derechos humanos, uno deba minimizar el sufrimiento de las víctimas de las pandillas; o

cuando, para defender la seguridad, se exija cerrar los ojos ante cualquier atropello del Estado.

Las maras imponían su voluntad mediante el terror. Un gobierno autoritario puede hacer algo parecido cuando concentra el poder y convierte a cualquier ciudadano en sospechoso sin garantías. No son fenómenos idénticos: el Estado tiene obligaciones legales que aquellas no tienen. Precisamente por eso debemos exigirle más, no menos. Una república no se mide solo por su capacidad de castigar delinquentes. También por su capacidad de impedir que los inocentes sean castigados.

La seguridad no puede ser una excusa para todo

Las medidas de Bukele son necesarias porque la situación anterior era excepcionalmente grave, sostienen algunos. El argumento merece considerarse. Pero una emergencia no puede convertirse en autorización permanente para gobernar sin límites. Si las medidas excepcionales se mantienen durante años y la ciudadanía tiene cada vez menos herramientas para controlar al poder, la pregunta ya no es solo cuánto bajaron los homicidios. Es qué clase de Estado queda en pie.



La seguridad sin libertad puede terminar siendo una cárcel con mejor publicidad. La libertad sin seguridad es una promesa vacía para quien vive aterrorizado. El desafío es construir un Estado capaz de garantizar ambas. Eso exige políticas firmes, investigaciones eficaces, condenas basadas en pruebas, prevención, oportunidades para los jóvenes y un sistema judicial que no dependa del presidente. No es una receta mágica. Es bastante menos espectacular que un presidente exhibiendo su poder ante las cámaras. Pero es la única manera de que la seguridad no dependa de la voluntad de un hombre.

Elegir entre dos miedos no es una solución

Bukele consiguió resultados extraordinarios en la reducción de homicidios. Debe reconocerse. También que una parte importante de la población lo respalda porque conoce el terror que padecía antes. Pero reconocer esos resultados no obliga a aceptar detenciones arbitrarias, denuncias de tortura, falta de garantías ni concentración del poder. Una cosa no borra la otra. Tampoco sirve despachar a quienes lo apoyan como autoritarios por naturaleza. Muchos estuvieron abandonados durante años y hoy sienten que pueden vivir con tranquilidad. Escuchar esa experiencia no significa convertir el sufrimiento pasado en un cheque en blanco.

El verdadero desafío es demostrar que se puede combatir eficazmente el crimen sin destruir las garantías que protegen a todos. Porque hoy el poder puede estar en manos de alguien con enorme respaldo popular. Mañana puede estar en otras. Las instituciones existen para que nuestros derechos no dependan de quién ocupa el sillón presidencial.

Al final, la pregunta no es si preferimos el terror de las maras o el autoritarismo de Bukele. La pregunta es por qué deberíamos resignarnos a elegir entre ambos.

Un Estado que no protege fracasa. Pero un Estado que, en nombre de proteger, se atribuye el derecho de atropellar, también fracasa.

La seguridad es un derecho.

La libertad también.

Ninguna sociedad debería entregar una para conseguir la otra.

**Eduardo FAZZIO**

Dr. En Medicina y Técnico Veterinario. Licenciado en Negocios Internacionales e Integración. Docente Universitario. Fue Edil por Montevideo

La oposición que se achica El batllismo que falta

Hay una paradoja en la política uruguaya: en nombre de fortalecer a la oposición, ciertos discursos terminan estrechando sus fronteras. Cuanto más se presenta al Frente Amplio como expresión de un socialismo enfrentado a la libertad, menos lugar queda para quienes discrepan con su gobierno sin compartir esa descripción del país, y la confrontación que cohesiona a los convencidos aleja a quienes faltan para construir una mayoría.

La mitad del país no es socialista

La competencia uruguaya se organiza en dos grandes espacios electorales, lo que no significa que existan dos sociedades irreconciliables. Ni la mitad del



Uruguay es socialista ni todos los que votan a los partidos tradicionales se reconocen en la derecha; hay frenteamplistas moderados en sus expectativas económicas, y colorados y blancos de convicciones reformistas y sensibilidad social. Cierta retórica convierte el balotaje en una batalla doctrinaria y confunde así una mecánica electoral con una división cultural.

Y cuando se trata a los frenteamplistas como adversarios culturales, se les cierran las puertas que habría que abrirles, y la identidad opositora se vuelve más intensa hacia adentro y menos permeable hacia afuera, en un encierro electoral autoconstruido.

Un partido sustituible

Para el Partido Colorado el riesgo es mayor. Si su identidad se resume en pertenecer al bloque contrario al Frente Amplio, ¿por qué habría de elegirlo un ciudadano en lugar del Partido Nacional, que tiene más peso electoral y el liderazgo de Lacalle Pou? Y si responde acentuando su perfil de derecha, deberá competir también con expresiones nuevas, más radicales y sin la carga de haber gobernado, hasta quedar atrapado entre la gravitación blanca y las derechas emergentes. Que exista una derecha colorada es parte de la pluralidad de un partido republicano y liberal; la dificultad aparece cuando una sola orientación pretende agotar su función y el rechazo al Frente reemplaza las razones propias para merecer el voto.

El centro tibio

Hay otra consecuencia, menos visible. En ciertos ámbitos opositores, reconocer un acierto del gobierno, cuestionar una propuesta conservadora o defender una intervención pública razonable se interpreta como debilidad, y al discrepante se lo despacha como «centro tibio». No hace falta expulsarlo; alcanza con convertir el matiz en sospecha, hasta que ser opositor exige serlo de determinada manera. Así, el espacio no frenteamplista puede terminar silenciando a quienes podrían ampliarlo. Pero el reformismo tampoco puede atribuir su retroceso solo a quienes lo descalifican: tiene que preguntarse por qué perdió organización, dirigentes, energía intelectual y capacidad de representar nuevas aspiraciones, porque la independencia de juicio se sostiene con una alternativa de fuerza propia.

Cuando los instrumentos mandan

Interviene también el aprendizaje coalicional de los partidos tradicionales. Julio María Sanguinetti es una figura mayor de la democracia uruguaya: condujo la transición, fue dos veces presidente y es el gran articulador de acuerdos y de

gobernabilidad, y cooperar para gobernar es legítimo y muchas veces indispensable. Sin perjuicio de ello, los instrumentos adquieren vida propia, y **los mecanismos que permitieron conservar capacidad de gobierno pueden terminar debilitando las identidades partidarias que hicieron posible aquella representación.** En la práctica, Sanguinetti procura conciliar objetivos que no siempre resultan compatibles: reivindica la identidad colorada y rechaza un partido único, mientras promueve mecanismos de coordinación que, a mi juicio, favorecen una integración electoral creciente y pueden terminar desembocando en un fusionismo al menos electoral. Así, el éxito del bloque pesa más que la capacidad de cada partido de representar ciudadanos distintos, y una identidad puede disolverse sin que nadie se lo proponga.

Por eso la autonomía colorada importa más allá del lema común y de una denominación histórica. Sin rechazar los acuerdos con el Partido Nacional, preserva un espacio donde puedan crecer ideas, corrientes y liderazgos con personalidad propia, aunque no coincidan con la mayoría del bloque. La cooperación no exige uniformidad: el sistema uruguayo permite que los partidos compitan por separado en octubre y acuerden en noviembre. La autonomía preserva las condiciones para ampliar mayorías.

Un partido sin función

Pero conservarla deja abierta la cuestión de fondo: ¿qué función política diferencial cumple hoy el Partido Colorado? Hay que reconocer una carencia propia. El partido tiene una tradición formidable, dirigentes, organización y antecedentes programáticos, y en la última elección presentó propuestas propias, pero no logró convertirlas en una identidad diferenciada: dentro de la oferta de la coalición, quedaron eclipsadas por el planteo del Partido Nacional. Le falta una propuesta reconocible y movilizadora que dé una razón específica para elegirlo. Un partido puede tener programas, candidatos y bancas y aun así no poder explicar qué intereses, aspiraciones y proyectos quedarían sin representación si dejara de existir, y ahí reside el riesgo de perder su función diferencial.

Proclamarse batllista, como hace más de un dirigente, sirve de poco sin propuestas novedosas y removedoras, capaces de producir efectos políticos y sociales. Sin ellas, el batllismo queda reducido a una enunciación retórica: decir que se es algo sin demostrarlo. Sería saludable que surgieran varias propuestas movilizadoras, incluso contrapuestas, que disputaran democráticamente la orientación del partido, porque así se renuevan las ideas y los liderazgos. Sin esa vitalidad, la autonomía se vuelve una formalidad y la supervivencia institucional un fin en sí mismo. Evitar la absorción por el Partido Nacional tampoco alcanza si la renovación consiste en parecerse a los moderados del Frente Amplio. **Ni copia de los blancos ni espejo del Frente: una personalidad propia, con una idea propia del progreso.**

Una idea propia del progreso

El batllismo tiene que recuperar su vocación transformadora en un Uruguay con otros trabajos y con clases medias que ven frustradas sus expectativas de progreso. La tarea es construir una sociedad donde la libertad individual encuentre condiciones reales para convertirse en oportunidades, y eso exige una educación que vuelva a impulsar la movilidad social, una economía abierta capaz de generar empleos de calidad y un Estado que conduzca, evalúe sus resultados y proteja sin sustituir la iniciativa de las personas. La seguridad, el desarrollo del interior y una protección social moderna forman parte de esa idea de progreso. Hay lugar para una tradición liberal en las libertades, solidaria en sus objetivos sociales, reformista en sus instrumentos y moderna en su economía, siempre que responda con resultados a las frustraciones que alimentan a las nuevas derechas: inseguridad, desconfianza en el Estado y temor al estancamiento. La moderación también puede ser firme. El batllismo histórico cambió el Uruguay porque tuvo audacia para reformar, disputar intereses y ampliar libertades, y esa es la rebeldía que hoy falta: una oposición capaz de pensar por sí misma.

Lo que corresponde preguntarse es qué país queremos construir y para qué necesita el Uruguay un Partido Colorado vigoroso, más que cómo parecer más adversarios del Frente Amplio.

Una oposición que vive del rechazo puede conservar a los convencidos; una fuerza que propone puede ampliar sus fronteras.

Nunca subestimes la importancia de la verdad

Zósimo NOGUEIRA
Comisario General (r)



L

liderazgo y Conducción política.

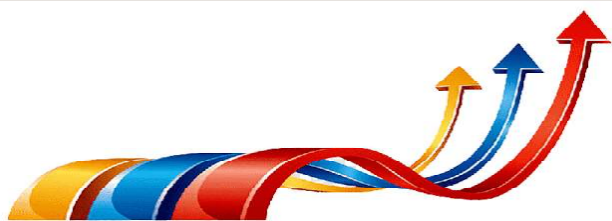
El líder no puede surgir del pánico o miedo a sentirse excluido. Debe poseer valores, demostrar integridad, condición indispensable para su liderazgo.

También ha de saber escuchar a los suyos y fundamentar sus decisiones.

Ni hay verdades absolutas ni las unanimidades son buenas, solo hay que saber compaginar y acercar diferencias. Es la esencia del entendimiento y permite una organización eficiente.

No ha de lograr adhesiones por presión sino por la verdad, por actuar honestamente sin engaños, diciendo su pensamiento y dando a cada uno sus espacios hegemónicos de responsabilidad.

Necesitamos líderes auténticos, obstinados en la búsqueda de la felicidad de nuestro pueblo, pero con la suficiente flexibilidad para concretar la mejor



propuesta, aunque sea contraria a su idea inicial. Con racionalidad siempre se encuentra el mejor camino.

Vivimos tiempos de penetración ideológica intensiva, en base a relatos. Que difícil desprogramar ese falso relato del gobierno en una población que no vivió esa época. Un relato adornado de coloridas fantasías, hechos reprobables omitidos.

Cuidado cuando en base a justificaciones utilitarias como la igualdad, el medio ambiente, la paz social, convivencia e inclusión se legitima lo inadecuado e incluso lo ilegal.

Ahí vemos, se sigue conjurando culpas en el gobierno anterior por las famosas lanchas patrulleras del Astillero español Cardama.

En lugar de presionar y acelerar construcción y entrega de las lanchas; se rompió un acuerdo comercial por un tema de garantías.

Que cambien las garantías, pero sin detener la construcción de las patrulleras, todo con el evidente y único fin de desprestigiar al gobierno anterior.

Seguimos sin lanchas, felices los empresarios del crimen organizado.

Como bien lo ha expresado el diputado Martín Jorge. Falta de habilidad empresarial, de regateos y presiones. Inexplicable. El Dr. Jorge Díaz sabe mucho de eso. Instauró los acuerdos abreviados en materia procesal penal.

Cortar el diálogo e ir a juicio sin prever las acciones de la contraparte. Ahora a litigar con arbitraje de organismos internacionales. Difícil pronóstico.

Si gana el Estado Uruguayo, ¿cómo piensa cobrar? Quedándose con la empresa Cardama.

Si pierde los números se disparan por honorarios, por reclamos de todo tipo, lucro cesante, desprestigio de la empresa, ocupación de espacios, daños a subcontratistas etc. etc.

Uruguay no puede declararse insolvente. Tiene que pagar.

Y si no gana ni pierde, cuanto le ha costado en honorarios profesionales, traslados, informes, enojos, prolongadas jornadas parlamentarias. Desprestigio, desconfianza.

Bueno, el modelo marxista de Antonio Gramsci está instalado relativizando la verdad y legitimando mentiras con conclusiones hipotéticas. Con los mismos protagonistas que ahora quieren impartir clases sobre el pasado reciente en las academias militares.

El descarnado propósito ideológico de nuestros actuales gobernantes.

El norteamericano Joseph Paul Overton, abogado, ingeniero, y ejecutivo de un «Centro de Pensamiento»; cristiano, explica en su ventana del discurso, conocida como ventana de Overton como las ideas políticas cambian con el tiempo, se desplazan de lo impensable a lo político. Cosas que eran radicales pueden ser aceptadas.

También dice «nunca subestimes la importancia de la verdad» para una sociedad libre.

Cada día vemos un nuevo grupo de desconformes que utilizan las redes de comunicaciones para agruparse bajo consignas, reivindicaciones y enojos con el sistema y con quienes nos gobiernan.

También consideran faltos de reacción a los políticos opositores.

Hay una verdadera ebullición de operadores del sistema y de antisistema.

Se levantan unos y se apagan otros.

Son innumerables los periodistas y comentaristas radiales y televisivos que se han sumado al aparato político de gobierno. Algunos/as muy renombrados se encuentran ocupando bancas y espacios de poder en los más variados organismos públicos.

Por otro lado, están: los descontentos de Mercedes Vigil nucleados bajo la consigna Reforma Constitucional 2029. El operador radial, analista, consultor y encuestador Nery Pinatto. Con su programa «Estado de situación» en radio nacional y Canal 3 tv cable de San José, quien intenta formar un partido para ingresar al parlamento.

El conductor y líder del Partido Identidad Soberana Dr. Gustavo Salles que desde el parlamento continua con su política antisistema y el actual boom el Dr. Eduardo Lust que tiene inscripto su Partido Ambientalista y recorre al país organizando conversatorios y participa en programas radiales y canales de streaming.

Promueve la unión política de los partidos de la Concertación y de grupos ideológicamente afines para desplazar a la dirigencia socialista comunista que está en el gobierno. Asumir el control político del país con valores republicanos y un criterio liberal.

También tiene aspiraciones políticas el controvertido periodista Jorge Bonica con su Bocón.

Todos, en mayor o menor medida hablan de exceso de parte de colectivos identificados con el gobierno como el de «desaparecidos» Desproporcionadas gratificaciones e invisibilidad de la contraparte.

Jubilaciones compensatorias heredables. Deformación del relato de la historia reciente. Crecimiento desmesurado del Estado. Que hay que achicarlo.

Comportamiento político. Procedimientos.

Cuando las mayorías gobernantes sienten amenazada su permanencia en el poder y su discurso no cautiva, para revitalizar al partido y acallar a la militancia se busca incluirlos en el reparto.

Se planean y promocionan grandes transformaciones. Con la excusa de cercanías, mejoras en la prestación de un servicio, hacer a la democracia más participativa, se disfrazan un fin esencialmente electoral.

Cuando Blancos y Colorados se vieron venir al Frente Amplio salió lo del Ballotage. Se retrasó, pero al final llegaron al poder.

Se fue la ley de lemas que concentraba elecciones y se nos vinieron, elecciones internas, nacionales, ballotage y municipales. Un gastadero de tiempos y de dinero. Y el estado que paga cada voto.

Siempre más. Más Ministerios, más cargos de confianza. Muchos de ellos innecesarios. Se duplican tareas, se jerarquizan funciones para mejorar sueldos, acomodar a un amigo o al dirigente que no logra cargo parlamentario.

En Montevideo siendo Tabaré Vázquez Intendente y para descentralizar, crearon 18 centros comunales. Fueron inaugurados el 15/10/1990.

Por Ley 18567 del 13/09/2009, y siendo presidente Tabaré Vázquez aprobó una nueva ley de descentralización: se crearon a nivel país 89 Municipios que en 2015 pasaron a ser 136.

En Montevideo se mantienen los centros comunales y se suman 8 Municipios. Cuánto dinero se va en superposición de tareas. Más personal, más infraestructura.

Los ediles eran y son honorarios, pero reciben importantes partidas fijas, viáticos, partidas por gastos de combustible, para asesores y asistentes, tienen derecho a tener funcionarios públicos en comisión, tienen exoneraciones contributivas. Y todo sin control, ya vimos lo del edil Pablo Leiva y sus asesores rentados.

Legisladores y directores de entes públicos todos reciben aparte de su importante salario esos mismos beneficios y más.

Hay organismos deficitarios que continúan con su actividad por afinidades y criterios ideológicos. Bombo humanista para justificar actividades improductivas Hay grandes eminencias que solo se pasan de informe en informe y no tienen potestades resolutivas.

Que le puede importar a Juan pueblo si hay o no un comisionado parlamentario para las cárceles o para los derechos humanos.

La nominada para este último cargo Dra. Mariana Motta rechazo por innecesaria su creación.

Ciertamente que ningún político es elegido sin apoyo y esfuerzo de dirigentes y militantes. Ni presidente, senadores, diputados, ediles, todo viene del apoyo de las bases partidarias.

Hay que reconocerlo. Si tienen condiciones para ocupar cargos disponibles que los nombren a término. Pero no crear cargos y que el estado siga creciendo para continuar con la repartija.

Se agotan los recursos y los grupos de hastiados empujan.

**Guzmán A. IFRAN**

Contador Público. Fue diputado por Montevideo y Coordinador de la Opp

El precio de una elección

El próximo 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará unas elecciones de medio término cuyas consecuencias desbordan ampliamente sus fronteras. Se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado. Donald Trump no estará en las papeletas, pero su gestión será sometida a una evaluación decisiva. Del resultado dependerán su capacidad legislativa, la intensidad del control parlamentario y las condiciones políticas de los dos años restantes de su mandato. Para Ucrania, Europa y los países expuestos a la inestabilidad energética, se juega además la orientación de una potencia cuyas decisiones afectan su seguridad y su economía. La campaña estadounidense transcurre entre preocupaciones domésticas, pero también bajo la presión de conflictos internacionales que sus protagonistas procuran convertir en instrumentos de influencia electoral. El estrecho de Hormuz constituye una expresión particularmente grave de esa realidad. Según una investigación publicada por Reuters el 14 de octubre, dos altos funcionarios iraníes afirmaron que Teherán está modificando sus ataques contra la navegación para mantener elevados los precios del petróleo e influir en los comicios estadounidenses. La atribución importa, porque se trata de

En ese contexto debe interpretarse el acuerdo anunciado por Trump con Vladimir Putin el 9 de octubre para aumentar la oferta de diésel ruso, acompañado por una flexibilización de sanciones. La justificación económica consiste en aliviar los precios; la utilidad electoral esperada resulta difícil de separar de esa decisión. Sin embargo, los volúmenes anunciados y las dificultades del propio sistema ruso de refinación plantean dudas sobre la magnitud y rapidez del alivio. Analistas citados por Axios advirtieron que esas exportaciones serían insuficientes para resolver la escasez mundial. Mientras el beneficio económico permanece sujeto a esas limitaciones, el efecto político favorece al Kremlin. Rusia obtiene oportunidades de ingresos y una señal de normalización de relaciones con Washington cuando continúa su agresión contra Ucrania. Associated Press destacó precisamente esa combinación de beneficios financieros y debilitamiento de la unidad frente a Moscú. Aquí aparece el problema de fondo. Rusia inició su agresión contra Ucrania en 2014 y la amplió con la invasión a gran escala de 2022. Aliviar la presión sobre el agresor sin obtener una reducción verificable de sus ataques puede ser interpretado por Kyiv como una traición política. Esa expresión constituye un juicio sobre la conducta estadounidense; Ucrania no integra la OTAN ni dispone de la garantía de defensa colectiva de sus miembros. Pero los compromisos de asistencia y la defensa de su soberanía generan expectativas cuya ruptura tiene consecuencias estratégicas. Zelenski cuestionó el acuerdo sobre diésel y reclamó mayor participación europea, mientras continuaban los ataques rusos. Si Washington concede alivio a Moscú y simultáneamente presiona a Ucrania por atacar las refinerías que abastecen al esfuerzo bélico ruso, corre el riesgo de restringir la capacidad defensiva del país invadido para obtener una mejora transitoria en los suministros estadounidenses. Desde una perspectiva favorable a Estados Unidos y a las democracias liberales, esa contradicción merece una crítica especialmente firme. La credibilidad de una alianza se construye también cuando sostenerla tiene costos.

Europa enfrenta, en consecuencia, una doble exigencia. Debe incrementar su capacidad para sostener a Ucrania y proteger su propia seguridad, mientras administra el impacto económico de la crisis energética y sus diferencias internas. El respaldo europeo adquiere mayor importancia cuando la relación entre Washington y Kyiv se deteriora, pero sustituir determinadas capacidades estadounidenses exige recursos, tecnología y tiempo. Tampoco corresponde suponer una coordinación perfecta entre Moscú y Teherán para reconocer que ambos pueden beneficiarse de las dificultades de Trump. Irán intenta convertir la presión energética en influencia política; Rusia aprovecha la búsqueda estadounidense de abastecimiento para debilitar su aislamiento. El riesgo es que una respuesta concebida para resolver una urgencia electoral termine reforzando los incentivos de quienes utilizan la guerra y la coerción para obtener concesiones.

¿Qué perspectivas existen para noviembre? La información disponible a mediados de octubre muestra posibilidades importantes de una recuperación demócrata de la Cámara de Representantes y una disputa más ajustada por el Senado. Reuters describe un escenario adverso para los republicanos y tensiones dentro del equipo presidencial ante esa perspectiva. Pero sería imprudente anunciar un resultado cerrado. La participación, la calidad de los candidatos y las particularidades territoriales pueden modificar el desenlace. En el Senado, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños y, a la vez, defender posiciones en estados como Georgia y Michigan, que Trump ganó en 2024. Una ventaja nacional no se convierte automáticamente en las mayorías necesarias en cada estado. La energía constituye un factor relevante, pero convivirá con otras preocupaciones económicas, migratorias y sociales. Los demócratas pueden beneficiarse del desgaste presidencial; convertir ese descontento en confianza propia sigue siendo su desafío. Los escenarios posteriores también requieren matices. Una Cámara de Representantes demócrata podría dificultar la agenda legislativa, condicionar partidas presupuestales y fortalecer las investigaciones sobre el Ejecutivo. Si los republicanos conservaran el Senado, Trump mantendría una ventaja decisiva para confirmar nombramientos. Una victoria demócrata en ambas cámaras ampliaría los contrapesos, aunque no transferiría automáticamente la conducción de la política exterior al Congreso ni garantizaría un cambio inmediato respecto de Ucrania. Si el oficialismo retuviera ambas, el presidente probablemente interpretaría el resultado como una ratificación de su rumbo. En cualquiera de esos casos, la elección abrirá una nueva disputa sobre cuánto poder debe concentrar la Casa Blanca y qué compromisos internacionales está dispuesto a sostener el país. Esa es la dimensión mayor del 3 de noviembre. Las democracias necesitan atender el costo de vida de sus ciudadanos y preservar la confianza de sus aliados. Sacrificar esta última para procurar una ventaja electoral inmediata puede producir un alivio efímero y una pérdida duradera. El combustible puede bajar de precio; recuperar la credibilidad suele resultar mucho más caro.



declaraciones de fuentes del régimen, no de una intención que debamos presentar como demostrada para cada incidente. Sin embargo, el mecanismo de presión resulta evidente. Las amenazas al transporte marítimo encarecen la energía, los seguros y los fletes; esos costos alcanzan luego la producción, la distribución y el consumo. El malestar económico puede transformarse en castigo al oficialismo. Irán procura, por tanto, explotar una vulnerabilidad de las democracias, cuyos gobernantes deben responder periódicamente ante ciudadanos que sienten las consecuencias materiales de las decisiones internacionales. Eso tampoco exonera a Washington de evaluar sus propias decisiones. La confrontación que siguió a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán forma parte de la explicación del deterioro energético actual. Reuters informó que Trump afirmó que no volvería a atacar antes de las elecciones, mientras continuaban los contactos para terminar el conflicto. El calendario electoral condiciona así la estrategia exterior, al mismo tiempo que la crisis exterior condiciona la campaña. El precio de los combustibles se convierte en una medida cotidiana de la eficacia presidencial. Además, petróleo y diésel presentan problemas relacionados, pero diferentes. Aumentar la disponibilidad de crudo no repara inmediatamente las refinerías dañadas ni elimina los cuellos de botella del transporte. Prometer una baja rápida puede servir para un acto de campaña; cumplirla depende de una infraestructura y de un mercado mundial que ningún presidente controla por completo.

Pablo CAFFARELLI
Abogado, Escribano. Escritor



¿Tenemos que esperar a que sea demasiado tarde?

Hay debates que Uruguay suele iniciar cuando el problema ya dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad difícil de revertir. La seguridad puede ser uno de ellos. Mientras la experiencia de Nayib Bukele en El Salvador vuelve a instalarse en la discusión regional, la pregunta que deberíamos hacernos no es si Uruguay puede copiar ese modelo, sino cuánto estamos dispuestos a hacer para evitar que el crimen organizado gane el terreno que todavía estamos a tiempo de defender.

Los números salvadoreños son contundentes. Según cifras oficiales, el país



cerró 2024 con una tasa de 1,9 homicidios cada 100.000 habitantes y 2025 con 1,3. Una transformación extraordinaria si se considera que en 2015 la tasa superaba los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero el resultado tiene una contracara que no debemos dejar de analizar: las detenciones masivas, las denuncias de abusos y los cuestionamientos a las garantías

judiciales. Reconocer la caída de la violencia no obliga a aceptar sin reparos todos los métodos utilizados para conseguirla.

En Uruguay, la discusión comienza a tomar forma entre quienes descartan de plano una estrategia semejante por razones ideológicas y quienes ven en ella una referencia para endurecer la respuesta estatal. Incluso, informaciones parciales sobre una eventual liberación de detenidos en El Salvador provocaron reacciones políticas antes de que se conocieran sus precisiones y alcances. El episodio debería servirnos para algo más que alimentar la confrontación, la seguridad exige información completa, rigor y menos reflejos partidarios.

Conviene, además, mirar nuestros propios datos. El Ministerio del Interior registró 369 homicidios en 2025, frente a 382 en 2024, una reducción del 3,4%. También descendieron las denuncias por rapiñas. No sería serio presentar estas cifras como prueba de un crecimiento generalizado de todos los delitos. Sin embargo, tampoco permiten desentendernos de un problema que hoy ya es estructural. La violencia letal se mantiene en niveles preocupantes y el avance del narcotráfico plantea desafíos que exceden la respuesta policial cotidiana.

¿Debemos esperar a que las organizaciones criminales consoliden un poder capaz de condicionar barrios, comunidades e instituciones para recién entonces discutir medidas excepcionales? ¿O es posible anticiparse, fortaleciendo la investigación, el control de fronteras y de los puertos y aeropuertos, y aplicando sanciones más severas a quienes integran estructuras criminales de alta peligrosidad, siempre dentro de la ley?

Una política firme requiere, además, cárceles diseñadas para impedir que los líderes del delito sigan dirigiendo sus negocios desde el encierro. Eso supone inversión, clasificación adecuada de los reclusos, personal capacitado y programas de educación y trabajo remunerado. El objetivo debería ser doble: reducir la capacidad operativa de las organizaciones y ofrecer herramientas reales de reinserción, con reglas claras y sin convertir las prisiones en escuelas del delito. El trabajo puede contribuir al sostenimiento personal y familiar, con mecanismos transparentes y respetuosos de los derechos laborales y personales.

Nada de esto es sencillo ni barato. Tampoco lo es reconstruir la seguridad cuando el Estado ha perdido terreno. La firmeza no debe confundirse con arbitrariedad, del mismo modo que el respeto a los derechos no puede utilizarse como excusa para la inacción.

Uruguay no necesita convertirse en El Salvador. Necesita estudiar sus resultados, comprender sus costos y construir una respuesta propia, eficaz y sostenible. Porque un país serio no espera a que una crisis alcance dimensiones irreversibles para comenzar a planificar. La vieja aspiración de ser una nación avanzada no se sostiene únicamente con instituciones respetables: exige la capacidad de anticipar los problemas, tomar decisiones difíciles y ejecutarlas.

La pregunta, en definitiva, es cuánto nos costará seguir postergando las decisiones que el futuro podría volver imposterables.

Pedro BORDABERRY
Abogado, Senador. FUENTE: red social X



Delitos nuevos, leyes viejas

Acaba de visitar Uruguay el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

Su país ha tenido un éxito contundente contra el delito y las organizaciones criminales que lo dominaban.

Eso debería interesarnos a los uruguayos que hoy enfrentamos una situación angustiosa en materia de

inseguridad.

En lugar de ello, muchos prefirieron sus cinco minutos de fama preguntando por otras cosas y no por como los salvadoreños lograron ese éxito.

Concurrí a la conferencia que brindó Ulloa.

Explicó las columnas sobre las que se asentó el combate al delito y al narcotráfico.

Destacó una que aquí casi no discutimos: la creación de nuevas figuras penales, entre ellas el llamado delito colectivo.

Se podrá coincidir o no con todo lo que ha hecho El Salvador.

Pero hay una lección que no depende de simpatías: el delito cambió en el mundo.



Ya no enfrentamos al delincuente solitario ni a la banda de barrio, sino a organizaciones con jerarquías, finanzas, territorio y armas.

Empresas del crimen que reemplazan en horas al sicario que cae preso.

Las viejas figuras con las que el Uruguay penaliza el delito ya no alcanzan.

Fueron pensadas para otro país y para otro delincuente.

Muchos gobiernos, de todos los

partidos, incluido el Frente Amplio, se concentran en el aumento de las penas. Lo comparto pero no alcanza.

Aumentar la pena de un delito pensado para el individuo no desarma a la organización.

Castiga al que aprieta el gatillo y deja intacto al que da la orden, al que financia, al que recluta. A eso se suma un problema de diagnóstico.

El ministerio del Interior ha sido errático al analizar cuánto pesan los narcos y las organizaciones criminales en los delitos que sufrimos. Mal se puede combatir lo que no se mide bien. Lo expresado por Ulloa coincide, en su orientación, con el proyecto de ley sobre penalización de organizaciones criminales que presenté hace meses.

La mayoría parlamentaria del Frente Amplio, inexplicablemente, ni siquiera lo pone en el orden del día.

No pido que lo voten a tapa cerrada.

Pido que se discuta para enfrentar la situación que vivimos.

Atender este problema fue reclamado por la propia fiscalía general de la Nación, como instrumento para enfrentar a la delincuencia organizada. No es una ocurrencia nuestra: lo piden quienes investigan y acusan todos los días. La idea es sencilla: el delito evoluciona y las normas para enfrentarlo deben hacerlo también.

La mera pertenencia a una organización delictiva debe ser un penado, más allá de los que cada integrante cometa a título individual.

Quien se integra a una estructura creada para matar, traficar y extorsionar ya eligió, y ya daña a la sociedad, aunque todavía no se le pueda probar otro hecho concreto.

No es un invento ni un atajo. Italia lo entendió en 1982, cuando incorporó a su Código Penal la asociación de tipo mafioso.

Con esa herramienta los jueces Falcone y Borsellino llevaron a la Cosa Nostra al maxiproceso de Palermo y lograron cientos de condenas.

Hasta entonces, los jefes salían absueltos porque nunca apretaban el gatillo. Eso lo hizo una democracia, con jueces independientes y con todas las garantías.

¡Vamos Uruguay!

Esto no es cuestión de partidos.

Es cuestión de voluntad para enfrentar a la delincuencia organizada.

El primer semestre cerró con 195 homicidios, el más violento de la última década.

El país se encamina a tener uno de los años más sangrientos desde que se llevan estadísticas.

Las organizaciones criminales no esperan a que el Parlamento encuentre lugar en su agenda.

**Lorenzo AGUIRRE**Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Músico. Director de Orquesta

Hipocresía sobre tregua, por transacción petrolera

Donald Trump, aseguró que, Rusia, tiene disposición en llegar a un acuerdo, a efectos de poner fin al conflicto con Ucrania, pero el problema radica en el mandatario Volodímir Zelenski. El presidente estadounidense expresó que, para lograr la paz definitiva, Ucrania debe cambiar de liderazgo, y de forma prepotente, señaló: «Zelenski, desobedeció mis instrucciones», para después, agregar: «¡más vale detenerse, es hora de que Ucrania tenga nuevo presidente!». Asimismo, Donald Trump manifestó que Vladimir Putin, «inmediatamente dio la orden de alto el fuego energético, además de instar a no romper la tregua». Después que Trump informara el «cese de fuego», Rusia bombardeó instalaciones y envió drones a «visitar» plantas energéticas en Kiev.

Hace poco más de año y medio, en el Despacho Oval de la Casa Blanca tuvo lugar un episodio lleno de vulgaridad - ¡en otros tiempos, por lo menos ocurrían sucesos estimulantes a la imaginación! -, donde una conversación con expresiones matonescas del presidente Donald Trump - acompañado de un adulón J.C. Vance, convertido en deplorable vicepresidente patotero -, fue lanzada al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski.

Todavía permanece en la memoria la patética actuación premeditada de Trump, no solo buscando fortalecer su perfil político, sino adueñándose de negociaciones diplomáticas - mandando suficientemente lejos al Cuerpo de Relaciones Exteriores, los cuales son canales convencionales adecuados -, dejando claro que, el preparado «round» transmitido en directo, en realidad no intentaba la paz entre Moscú y Kiev, más bien obtener bajo prepotencia un «acuerdo» económico, evidenciando explotación a un pueblo sufrido, destruido, necesitado.

El trato, comprometía a Ucrania con el 50% de todos los ingresos de la futura monetización

Atlántico Norte» («OTAN»).

Volodímir Zelenski manifestó que, si Trump pretende se celebren elecciones - las primeras desde el inicio de la invasión rusa -, «le pida a Putin conceder 60 días de «Alto el Fuego», y por supuesto estaremos dispuestos a aceptar la decisión ciudadana».

Es loable que un pueblo democrático como el ucraniano decida si Zelenski continúa con el mandato, o si la crítica situación necesita otro liderazgo, pero la «Constitución», marca que, bajo estado de Ley Marcial no pueden realizarse comicios. De todas formas, solo el 11% considera llamar a elecciones, pues, cambiar de mandatario, provocaría un período de ambigüedad.

Ante todo ... ¡transacciones!

El acontecimiento de «acuerdo» llega simultáneamente con los crecientes ataques por parte de Ucrania a las refinerías rusas, un «estilo» no compartido por Donald Trump, y como entrometido asesor en cháchara autárquica, desaconseja - lo peor de todo, es, que, lo hace público, sin un mínimo de ética -, pues, las instalaciones de referencia dejan de abastecer combustible a varios países.

En la «alianza Trump - Putin», el ex «007» de la «KGB» levantaría la prohibición de exportar diésel, y se comprometería a distribuir en el mercado internacional 500.000 toneladas en noviembre, y 1.000.000 en diciembre, obviamente incluyendo prioridad a Estados Unidos, hecho que, sin lugar a dudas, comenzaría a marcar fluctuaciones en los actuales platos de la balanza.

El coqueteo está generando desaprobación no solo en funcionarios europeos, también del «Partido Republicano», porque el compromiso entre Washington y Moscú incluye una flexibilización en cuanto a sanciones por parte de Estados Unidos, «bondad» intentando bajar el precio del combustible pero iniciativa tomada de cara a las legislativas estadounidenses que se llevarán a cabo el próximo martes 3 de noviembre.

Después de lo narrado, quizá sería potable meditar si, la crisis de precios en los



de activos de recursos relevantes, metales estratégicos - petróleo, gas natural - para desarrollo tecnológico y la industria de Estados Unidos, siendo volcados a un «fondo de reconstrucción», pero por supuesto administrado por Washington.

Al parecer, el soberbio de Trump se pasa al enemigo - no solo de Estados Unidos, sino también de Europa, aunque el viejo continente no hace lo suficiente para defender libertades y son vejados en buena medida por los burócratas de Bruselas -, apoyando a un hipócrita desequilibrado como el presidente Vladimir Putin, el cual, todavía, se burla diciendo estar resuelto a mediar para calmar las aguas, aunque el asesino de la «KGB», a lo largo de cuatro años y medio de invasión a Ucrania ensangrentó esos territorios llevando la vida de 75.000 ciudadanos, más allá que la penetración provocara también la muerte de 570.000 soldados rusos.

Ahora, a Trump no le alcanzan sus amenazas, tóxico comportamiento, e inenarrable ordinario verbal hacia Zelenski, al señalar: «¡haces el trato, o estamos fuera!» ... «¡tienes que estar más agradecido con la Casa Blanca, eres un irrespetuoso y mal agradecido!», sino que, acompañado de serviles funcionarios de su gabinete, insiste diciéndole al presidente de Ucrania la obligación de hacerse a un lado - paralelamente no faltaron alcahuetes ignorantes reclamando llamar a elecciones -, más allá de imponer que, Ucrania, debe renunciar a su solicitud de ingreso a la «Organización del Tratado del

combustibles, en realidad no ha tenido su disparo gracias a la guerra en Medio Oriente...pero, bueno, lo «importante» son las charlas distendidas entre las potencias referidas, respecto a «comenzar a evaluar y luego encaminar» el fin del conflicto bélico en Ucrania después de concretar el momento tan esperado por diplomáticos de uno y otro lado... ¡una multimillonaria «transacción» sobre petróleo, beneficiando empresas «amigas» en Medio Oriente!

El gabinete estadounidense y el Kremlin, se dan fuerte abrazo para empezar a trabajar intensamente y sin pérdida de tiempo, con gran cantidad de yacimientos petrolíferos y refinerías, entre las cuales se encuentra «Lukoil», la mayor empresa energética de Rusia, y el principal inversor estadounidense, Todd Boehly, auspiciante con dos millones de dólares, a las causas políticas de Donald Trump.

A veces, sería potable ingerir algún suplemento dietario a base de fosfolípidos y vitaminas, para mejorar la función cerebral - especialmente la memoria - a efectos de tener presente que, la estructura de propuestas del presidente Trump, son un «refrito» de aspectos conversados con Putin en la «Cumbre de Alaska», aunque, en ese momento, el frío de Anchorage solo sirviera para «templar» algunos puntos del plan ahora descongelado y convertido en realidad.

Marcelo GIOSCIA CIVITATE
Abogado. Periodista



Megaproyecto de inversión crea expectativas

El anuncio desde Presidencia de la República de la firma de un contrato de inversión con una multinacional de origen español, que hace una década opera en nuestro país (administrando parques eólicos en nuestro territorio que genera energía fotovoltaica) ha generado reacciones positivas y genuinas expectativas de desarrollo. La que se anuncia como la mayor inversión en el territorio nacional (que distribuirá sus instalaciones en los departamentos de Canelones, San José y Florida) y que incluso apuesta a la construcción de un barrio privado en Colonia, ha producido una auspiciosa esperanza en el actual gobierno, cuya desaprobación ciudadana ha trepado a porcentajes importantes y ha



sido una evidente preocupación para quienes lo integran. Una vez que se instale esta empresa, que maneja centros de datos (data centers) y generación de energía renovable de gran volumen, supondrá para nuestra empresa estatal UTE un importante desafío. Significará entre otras, la exigencia de nuevas inversiones en redes que puedan soportar tales exigencias de consumo, así como por otro lado, la necesidad de contar con ingentes volúmenes de agua para la eficacia de la refrigeración de esos equipos, lo que supondrá también atender todas las contingencias que hacen al medio ambiente. El anuncio se presenta como auspicioso -en lo que hace a la generación de empleos, que en las etapas de construcción superarían los tres mil puestos de trabajo- pues generaría una nueva fuente de riqueza genuina, lo que incidiría favorablemente, en los ingresos de quienes puedan obtenerlos y sus familias y por su parte, los organismos de seguridad social también contarían con mayores aportes. Que esta inversión se concrete con bien para el desarrollo de nuestro país todo, debe ser un justo motivo de regocijo y tendrá que ser vista como una gran oportunidad que esperamos sea aceptada sin prejuicios ideológicos por sectores de la «izquierda» siempre sesgada en lo que hace a proyectos de inversión privada y su tradicional resquemor y desconfianza hacia quienes la realizan y cómo se plantan frente a la supuesta segregación social que para estos sectores, se profundizaría. Debe observarse que los sindicatos afines al gobierno de turno, muchas veces han trabado actividades productivas y de inversión sin que las autoridades del MTSS hayan actuado con la objetividad que debiera haber ejercido en conflictos como el portuario con las pérdidas y consecuencias nefastas tanto para las empresas pesqueras, como para el propio Estado. En resumen, que las intencionalidades políticas panfletarias de esa izquierda, contra el «neoliberalismo y el conservadurismo capitalista», «culpables» para su concepción de las desigualdades e injusticias sociales no impidan el pleno desarrollo que tendrá que llegar de una vez, de la mano de este tipo de inversiones y que la reducción de los porcentajes de población bajo niveles de pobreza, obedezca más a ingresos por trabajos dignos, que a transferencias asistencialistas que se realizan a costa de los contribuyentes.

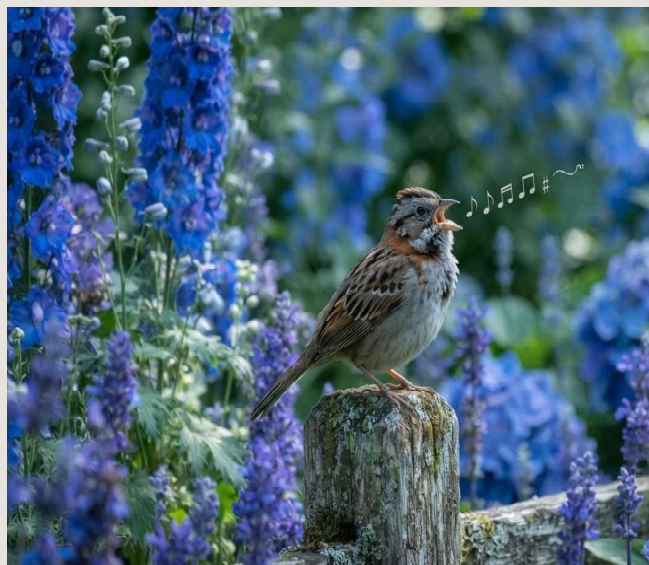
David Auris Villegas

Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario. Creador del ABDIVCPCE.
davidauris@gmail.com



Nuestra diversidad es nuestro superpoder

Imaginemos un país donde todo es de un solo color, como un jardín de flores monocromáticas y una especie de ave con un único trino. ¿Acaso no sería un paisaje monótono y triste? Y si así fuera la humanidad, de solo un color, un solo idioma y una sola idea, la vida sería triste y sin encanto. Pero, para nuestra suerte, somos diversos. Hay tantas voces e ideas diferentes que enriquecen y hacen más linda la vida en el planeta con melodías de fiesta. Nuestra diversidad es nuestro superpoder. Mientras somos más diversos, más ideas germinan, más propuestas se plantean, y esas ideas, al fusionarse, ayudan a avanzar al desarrollo del país. Solo nos falta construir una convivencia donde esa hermosa diversidad no cause daño a otros. Tenemos que encaminarnos, gracias a la educación, hacia un terreno que mejore la vida de todas las personas. Aunque no es un día oficial de la identidad declarado por la UNESCO, el 12 de octubre, en toda Latinoamérica y España, recordamos el encuentro de dos culturas ocurrido en 1492. Para muchos pensadores optimistas, como Mario Vargas Llosa, gracias al arribo de los españoles, nuestro continente pasó a conformar parte de la cultura occidental. Sin embargo, el filósofo argentino Enrique Dussel sostiene que empezó el encubrimiento de nuestra cultura por



la cultura eurocentrista, mientras el sociólogo peruano Aníbal Quijano afirma que este encuentro inició la colonialidad del poder extranjero.

Respetando las ideas de estos pensadores y guardando memoria del dolor que significó aquel encuentro cultural, ahora, en pleno siglo XXI, tenemos el gran propósito de desplegar una educación que permita el desarrollo equitativo y nos enseñe a mirar a los demás como nuestro socio y aliado de la vida. No podemos vivir siempre mirando el pasado y buscando trincheras para culpar nuestras desgracias, ya que en nuestras venas e ideas sobreviven y recorren sus genes y sus recuerdos. Es tiempo de ver el futuro y construir nuestro porvenir y honrar la sagrada memoria de quienes nos precedieron. Así como los europeos han depuesto muchas de sus rivalidades del pasado para encarar un futuro común, nosotros también podemos construir una sociedad poderosa.

Honestamente, es más valioso sembrar hipótesis de convivencia para el futuro en lugar de estar escarbando heridas del ayer. Que nuestra diversidad nos ayude a construir una vida repleta de oportunidades para todos.



Fitzgerald CANTERO PIALI
Experto en Geopolítica

El futuro y las represas del pasado

Las grandes obras que heredamos pueden adquirir un nuevo valor en la transformación energética. Modernizarlas y prepararlas para un clima más incierto es una responsabilidad con las próximas generaciones.

Hay decisiones cuyo verdadero alcance solo puede comprenderse muchas décadas después de haber sido tomadas. Una central hidroeléctrica pertenece a esa categoría. Quienes la proyectan saben que sus beneficios se extenderán mucho más allá de un período de gobierno y que buena parte de sus usuarios todavía no ha nacido.

Uruguay conoce esa experiencia. Rincón del Bonete, Baygorria, Palmar y Salto Grande forman parte de nuestra historia productiva y de nuestra vida cotidiana. Detrás de esos



nombres hay ingeniería, financiamiento, trabajadores, interconexión regional, acuerdos e instituciones. Hay, sobre todo, una sociedad que destinó recursos a construir capacidades para el futuro.

Hoy, cuando la conversación energética se concentra en paneles solares, aerogeneradores, baterías e inteligencia artificial, corresponde volver a mirar esas obras. Su contribución puede adquirir nuevas dimensiones precisamente por las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo.

Una pregunta atraviesa ese debate: ¿estamos preparando la infraestructura que heredamos para las necesidades que vienen?

El nuevo valor de una obra conocida

Durante mucho tiempo, la principal manera de valorar una central eléctrica fue observar cuánta energía producía. Esa sigue siendo una medida fundamental. Sin embargo, en un sistema con una participación creciente de fuentes variables, también importa cuándo puede producir, con qué rapidez puede responder y cómo contribuye a mantener el equilibrio entre generación y consumo.

El sol y el viento aportan electricidad según la disponibilidad del recurso. La demanda, mientras tanto, sigue los ritmos de los hogares, las fábricas, el comercio y el transporte. Hacer coincidir ambos lados exige redes, almacenamiento, intercambios y capacidad de ajustar la operación.

Allí, las centrales hidroeléctricas con embalse tienen un valor particular. Dentro de sus condiciones técnicas, ambientales y de disponibilidad de agua, pueden reservar recursos para otro momento y modificar su generación con rapidez. Esa capacidad ayuda a aprovechar mejor otras fuentes renovables y a sostener el abastecimiento.

Una obra concebida hace décadas puede cumplir así nuevas funciones en un sistema mucho más diverso. Su valor debe considerar tanto la electricidad que entrega como los servicios que presta para que el conjunto funcione.

Para Uruguay, esta reflexión tiene especial sentido. La diversificación de nuestra generación permite pensar las distintas fuentes como partes de un mismo sistema. La

complementariedad entre ellas constituye un activo que requiere planificación y actualización permanente.

Modernizar también es construir futuro

La necesidad de modernizar las instalaciones hidroeléctricas existentes y aprovechar su capacidad de aportar flexibilidad a los sistemas eléctricos es una prédica constante. Renovar turbinas y generadores, actualizar controles, incorporar mejores herramientas de pronóstico y reforzar la seguridad puede prolongar la vida útil de una central y mejorar su desempeño. En determinados casos, también permite obtener más energía del agua disponible o responder mejor a las necesidades de la red. Salto Grande es un buen ejemplo en este sentido.

Cada intervención exige estudios y una evaluación económica rigurosa. No todas las centrales tienen las mismas posibilidades ni todas las inversiones ofrecen iguales beneficios. Pero existe una pregunta que debería formar parte de cualquier estrategia: ¿cuánto podemos mejorar el aprovechamiento de lo que ya tenemos?

La discusión trasciende al sector energético. Construir una obra crea también una obligación de mantenimiento, conocimiento y renovación. Su costo real incluye los recursos necesarios para que siga prestando un buen servicio durante décadas.

Gobernar también es mantener. Es presupuestar una reparación antes de que la falla interrumpa el servicio. Es conservar equipos técnicos, actualizar información y evitar que el deterioro silencioso termine imponiendo decisiones urgentes y más costosas.

Esa tarea merece reconocimiento público. De ella depende una parte considerable del valor de nuestro patrimonio colectivo.

El agua exige una mirada más amplia

La hidroenergía tiene, además, una condición que obliga a ser especialmente cuidadosos: depende del agua.

Las sequías recuerdan que la potencia instalada no equivale a energía disponible en cualquier circunstancia. Un sistema puede contar con grandes centrales y enfrentar restricciones si los aportes hídricos resultan insuficientes.

Por eso, modernizar también significa revisar supuestos. Las series históricas son indispensables, pero la planificación debe incorporar escenarios de variabilidad y cambio climático, fortalecer los pronósticos y evaluar cómo responder ante períodos secos prolongados o eventos extremos, como los que nuestra región está padeciendo, el llamado Super Niño, con situación dispar según las subregiones, algunos con sequías extremas y otros con lluvias incesantes.

A su vez, el agua cumple múltiples funciones. Abastece a las personas, sostiene ecosistemas, permite producir alimentos y, según la cuenca, sirve a otras actividades económicas. La operación de los embalses debe reconocer esa realidad y las prioridades que corresponden en cada caso.

La legitimidad de la hidroenergía requiere seguridad de las instalaciones, cuidado ambiental, información pública y una relación responsable con los territorios. En los proyectos compartidos entre países, exige también cooperación sostenida.

Para América Latina, esta es una agenda de desarrollo. Aprovechar sus recursos hídricos demanda instituciones capaces de coordinar usos, gestionar riesgos y sostener decisiones durante muchos años.

Lo que dejaremos en funcionamiento

La discusión sobre infraestructura suele organizarse alrededor de lo que falta construir. También deberíamos preguntarnos qué queremos dejar en funcionamiento.

Una central renovada, una red preparada para nuevas demandas o una cuenca mejor gestionada pueden parecer resultados menos visibles que una inauguración. Sus efectos se expresan en la continuidad del servicio, en los costos que se evitan y en la capacidad de una economía para crecer.

Esto requiere reglas que reconozcan los servicios que necesita el sistema eléctrico, financiamiento adecuado y equipos profesionales. También exige preservar el conocimiento acumulado y formar a quienes asumirán su operación en las próximas décadas.

En Uruguay, las represas permiten observar el vínculo entre generaciones de una manera concreta. Recibimos obras que hicieron posible parte de nuestro desarrollo. Nos corresponde conservarlas, actualizarlas y complementarlas con las inversiones que demandará el país que viene.

La medida de una política pública también está en lo que sigue funcionando muchos años después de que sus responsables dejaron el cargo.

Quienes construyeron aquellas centrales trabajaron para un Uruguay que todavía no conocían. Nuestra responsabilidad es actuar con una perspectiva semejante: cuidar lo recibido, prepararlo para nuevas exigencias y ampliar las capacidades que heredarán otros.

El futuro también se construye con las represas del pasado y depende de las decisiones que tomemos hoy sobre ellas.

La odisea de los giles: cuando la confianza de un pueblo se convierte en su mayor desafío

Adrián BAEZ

 Abogado Laboralista. Periodista.
Convencional Nacional y Departamental. Ex Edil.


La película argentina nos invita a reflexionar sobre una realidad que también atraviesa al Uruguay: las dificultades de quienes trabajan ahorran y confían en un sistema que muchas veces parece favorecer a los más poderosos.

Hay películas que trascienden la pantalla y terminan convirtiéndose en verdaderas radiografías de nuestras sociedades. La odisea de los giles, protagonizada por Ricardo Darín y Luis Brandoni, es una de ellas. Ambientada en la Argentina de la crisis de 2001, cuenta la historia de un grupo de vecinos que reúne sus ahorros para concretar un emprendimiento colectivo y termina siendo víctima de una maniobra financiera.

En nuestro país, el debate sobre el costo del Estado, la eficiencia del gasto público, la burocracia y las oportunidades de desarrollo debería ocupar un lugar central en la agenda nacional. No alcanza con exhibir indicadores económicos favorables si sus beneficios no llegan efectivamente a la vida cotidiana de la población.

Sin embargo, La odisea de los giles también transmite un mensaje esperanzador. Sus protagonistas descubren que la organización colectiva puede convertirse en una herramienta para enfrentar la adversidad.

Esa enseñanza resulta especialmente valiosa para el Uruguay del interior, donde las cooperativas, las pequeñas empresas y las organizaciones sociales han demostrado históricamente que la solidaridad puede generar oportunidades donde los recursos



Pero detrás de aquella historia de engaños, frustraciones y solidaridad aparece una pregunta que mantiene plena vigencia: ¿qué sucede cuando los ciudadanos dejan de confiar en las instituciones que deberían protegerlos?

En Uruguay, aunque nuestra realidad económica e institucional es diferente a la argentina de aquel entonces, existen situaciones que permiten establecer ciertos paralelismos. Las dificultades de pequeños comerciantes, productores rurales y emprendedores, el endeudamiento de numerosas familias y las desigualdades de oportunidades constituyen desafíos que no pueden ser ignorados.

El ciudadano que trabaja durante décadas paga sus impuestos y procura construir un futuro mejor muchas veces siente que sus esfuerzos no encuentran una respuesta proporcional. Mientras algunos logran superar las dificultades, otros deben cerrar sus negocios, postergar proyectos o resignarse a sobrevivir.

La película también plantea una cuestión profundamente política: la distancia entre quienes toman las decisiones y quienes padecen sus consecuencias.

escasean.

Por supuesto, la respuesta a las injusticias no debe encontrarse fuera de la ley, como ocurre en determinados pasajes de la ficción, sino mediante instituciones fuertes, controles efectivos y una Justicia verdaderamente accesible.

Una democracia no se fortalece únicamente celebrando elecciones. Se fortalece cuando sus ciudadanos sienten que las reglas son iguales para todos, que el esfuerzo tiene recompensa y que nadie está por encima del Derecho.

Quizás la mayor enseñanza de aquella película sea que los verdaderos giles no son quienes confían, trabajan y sueñan con progresar. El verdadero fracaso de una sociedad comienza cuando esa confianza es traicionada.

Uruguay necesita recuperar y preservar una convicción esencial: que actuar honestamente, trabajar y apostar al futuro nunca debería convertirse en una ingenuidad.